

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Reunión del Comité de Expertos  
Del 10 al 14 de septiembre de 2012  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.333/12 rev. 4  
14 septiembre 2012  
Original: español

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 14 de septiembre de 2012)

## SUMARIO DEL INFORME

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en el Estado Plurinacional de Bolivia del artículo III, párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Bolivia en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Bolivia al cuestionario; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 26 y el 29 de marzo de 2012 por los miembros del subgrupo de análisis de Bolivia, integrado por Ecuador y Estados Unidos, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Bolivia y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas, y brindó a Bolivia la oportunidad de ofrecer y/o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Bolivia analizados en este informe son: el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC); el Ministerio Público; el Órgano Judicial; la Procuraduría General del Estado (PGE); y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Algunas de las recomendaciones formuladas para ser consideradas por Bolivia en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Proveer a los órganos de control (MTILCC, Ministerio Público, Órgano Judicial y UIF), con los recursos financieros y humanos necesarios para el cabal desarrollo de sus atribuciones y funciones; y hacer las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para obtener la cooperación técnica requerida por los mismos.

En cuanto al MTILCC, adoptar la normativa necesaria para la aplicación, entre otros, de las disposiciones de la Ley No. 004 que requieren ser reglamentadas; del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE); y del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos.

Con respecto al Ministerio Público, adoptar su nueva Ley Orgánica; nombrar al Fiscal General y a los Fiscales de Distrito, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política del Estado; incrementar la cantidad de fiscales especializados anticorrupción, designándolos de conformidad con lo establecido en la Ley No. 004; y fortalecer el portal en Internet del Ministerio Público.

En lo atinente al Órgano Judicial, designar a los jueces anticorrupción y crear los tribunales y juzgados especializados en la materia, de acuerdo con lo requerido por la Ley No. 004; realizar un estudio sobre el bajo porcentaje de casos de corrupción que resultan en una sentencia; y promover el uso del sistema IANUS.

En lo relativo a la PGE, establecer las oficinas Departamentales responsables de desarrollar las funciones y atribuciones de la PGE en los Departamentos respectivos y contribuir, junto con el MTILCC y las otras entidades competentes, a la elaboración de legislación en el área de transparencia y la lucha contra la corrupción.

En relación con la UIF, participar en la rendición pública de cuentas a la que están obligadas las entidades públicas, y mantener estadísticas sobre las actividades de la UIF relativas, entre otras, a la detección e investigación de los actos de corrupción.

Las buenas prácticas sobre las que Bolivia suministró información se refieren, sintéticamente, a la ejecución de boletas y pólizas de garantía para contratar con el Estado; la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias, para, entre otros, definir de manera coordinada las políticas del Estado en materia anticorrupción; la creación del Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha contra la Corrupción (IBEC), el cual, entre otros, realiza investigaciones en transparencia, corrupción y ética; y el concurso denominado “El Peor Tramite de Mi Vida”, para mejorar la atención proveída a la ciudadanía por las instituciones públicas.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Bolivia en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Bolivia en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuales de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan, la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas; el proceso de rendición pública de cuentas al cual están obligadas todas las entidades públicas; el fortalecimiento de la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas; y la tipificación del enriquecimiento ilícito, entre otros.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Bolivia en la Primera Ronda que quedan vigentes, o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como, la adopción de códigos de ética por parte de las instituciones públicas, que abarquen, entre otros, los conflictos de intereses, la preservación de los recursos públicos, y la obligación de denunciar los actos de corrupción; la implementación del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en la Ley No. 004; seguir fortaleciendo el proceso de recepción, manejo y verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas; resolver la posible contradicción entre los artículos 172 (inciso 15) y 214 de la Constitución Política del Estado, y proceder al nombramiento formal del Contralor o la Contralora General; y la adopción de las leyes sobre el acceso a la información y el control social.

# **COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

## **INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA<sup>1</sup>**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **1. Contenido del Informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en el Estado Plurinacional de Bolivia de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el artículo III, párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado Plurinacional de Bolivia por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en: [www.oas.org/juridico/spanish/blv.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/blv.htm)

#### **2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, el Estado Plurinacional de Bolivia ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 29 de marzo de 1996 y depositó el respectivo instrumento de ratificación el día 4 de febrero de 1997.

[5] Asimismo, suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

---

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 14 de septiembre de 2012, en el marco de su Vigésima Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 10 al 14 de septiembre de 2012.

## I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

### 1. Respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida del Estado Plurinacional de Bolivia en todo el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. El Estado Plurinacional de Bolivia envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*,<sup>2/</sup> la cual se realizó durante los días 26 al 29 de marzo de 2012, por parte de los representantes del Ecuador y Estados Unidos, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por el Estado Plurinacional de Bolivia hasta el día 29 de marzo de 2012, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité; la Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

### 2. Documentos y opiniones recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado Plurinacional de Bolivia, se recabó información de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

---

2. La Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2) está disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA:**

### **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción; el Ministerio Público; el Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia; la Procuraduría General del Estado; la Unidad de Investigaciones Financieras; la Contraloría General del Estado; y el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por el Estado Plurinacional de Bolivia que serán analizados en el presente informe:

[13] El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra La Corrupción, cuyo propósito es trabajar en la construcción de un Estado Plurinacional confiable con Cero Tolerancia a la corrupción y plena transparencia en la Gestión Pública, formulando normas, para diseñar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos construidos con la participación de actores sociales, para vivir bien.

[14] El Ministerio Público, cuyo propósito es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública.

[15] La Unidad de Investigaciones Financieras, como la entidad especializada en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos precedentes, a través del análisis financiero patrimonial; la emisión de políticas y normas, así como la permanente fiscalización de su cumplimiento.

[16] El Órgano Judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual contribuye a la paz social y a la seguridad jurídica, orientando la función jurisdiccional de los tribunales del Estado Plurinacional, hacia los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, honestidad, legalidad, probidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad entre las partes, a través de la representación y dirección que ejerce, la jurisprudencia que emite, y la efectiva coordinación con todas las instancias del Órgano Judicial, y el Consejo Magistratura como la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión

[17] La Procuraduría General del Estado, cuyo propósito es promover, defender y precautelar los intereses del Estado.

## 1. MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

### 1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[18] El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[19] En cuanto a su objetivo y funciones, el Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009<sup>3/</sup>, en su artículo 26, dispone que las funciones del MTILCC, incluyen, entre otras, la de formular y ejecutar políticas relacionadas con la lucha contra la corrupción (literal “a”); proponer proyectos normativos para eliminar la corrupción (literal “b”); promover programas de capacitación ciudadana (literal “c”); supervisar la rendición de cuentas (literal “e”); promover el fortalecimiento de instrumentos y medios de control social (literal “h”); estructurar políticas de fortalecimiento de la participación ciudadana (literal “i”); estructurar y ejecutar políticas y programas de acceso a la información (literal “j”); promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación de ganancias ilícitas (literal “k”); promover el desarrollo de la ética pública en todas las entidades del Estado (literal “m”); presentar denuncias por hechos de corrupción (literal “q”); coordinar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la corrupción (literal “r”); verificar y trabajar por el cumplimiento de las convenciones y acuerdos internacionales sobre lucha contra la corrupción (literal “s”); y diseñar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo del MTILCC, así como para informar a la población sobre temas relacionados a su competencia e implementar campañas de concientización de lucha contra la corrupción (literal “t”).

[20] En cuanto a su estructura, el MTILCC está compuesto por dos Viceministerios: (1) el Viceministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia, cuyas responsabilidades están relacionadas, entre otros temas, la promoción de la ética pública, el acceso a la información, el control social y el sistema de rendición pública de cuentas; y (2) el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, el cual cuenta entre sus funciones con la de realizar investigaciones y dar seguimiento a los procesos judiciales relacionados con actos de corrupción, falta de transparencia y la recuperación de activos del Estado sustraídos por actos de corrupción. Asimismo, el Ministerio es responsable del seguimiento de proyectos de ley, a través de la Unidad de Análisis Jurídico de la Dirección Jurídica.

[21] En relación con la manera en la que adopta sus decisiones el MTILCC, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, explica que “[l]as decisiones asumidas por el Ministerio se enmarcan en la Constitución Política del Estado, la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Plan Nacional de Desarrollo, para la presentación de denuncias ante el Ministerio Público u otras instancias disciplinarias de diferentes órganos, las decisiones se asumen en base a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras disposiciones que coadyuvan en el ámbito (Código Penal y otros). Por las características del trabajo del MTILCC, existen varios filtros internos de revisión para la toma de decisiones. En caso de ser necesario, la consulta sobre la decisión a ser tomada es puesta a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva [Ministro(a) de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción].”<sup>4/</sup>

---

3. Disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

4. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 12, disponible en: [www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_blv\\_resp.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_blv_resp.pdf)

[22] Con respecto a la designación de la máxima autoridad jerárquica del MTILCC, de acuerdo con el numeral 22 del artículo 172 de la nueva Constitución Política del Estado de 2009 (CPE), la designación de Ministros y Ministras del Estado, y por ende, de la máxima autoridad jerárquica del MTILCC, es atribución del Presidente.

[23] En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios del MTILCC de responder por sus actuaciones, incluyendo a la máxima autoridad ejecutiva del mismo, durante la visita in situ los representantes del MTILCC explicaron que, de acuerdo con la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), todo servidor público será responsable por los resultados del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo (artículo 28). Al respecto, la misma Ley SAFCO dispone que dicha responsabilidad podrá ser: 1) administrativa, *“cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público”* (artículo 29); 2) ejecutiva, por omisión de rendir cuentas, negligencia o deficiencia de la gestión ejecutiva, entre otras (artículo 30); 3) civil, *“cuando la acción u omisión del servidor... cause daño al Estado valuable en dinero”* (artículo 31); ó 4) penal, *“cuando la acción u omisión del servidor público..., se encuentra tipificada en el Código Penal”* (artículo 34).

[24] En seguimiento de lo anterior y con respecto a la responsabilidad ejecutiva de la máxima autoridad del MTILCC, el literal “g” del artículo 42 de la Ley SAFCO, permite al Contralor General del Estado, frente a una determinación de responsabilidad ejecutiva, recomendar la destitución de dicha máxima autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

[25] Con relación a los controles internos y externos, la Ley SAFCO, en su artículo 13, prevé que el control gubernamental se integra por: a) el sistema de control interno, comprendido, entre otros, por la auditoría interna; y 2) el sistema de control externo posterior, aplicado por medio de la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. En este sentido, el artículo 23 de la misma Ley dispone que es la Contraloría General del Estado el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental y que por lo tanto, sus funciones incluyen la emisión de las normas básicas de control interno y externo, la evaluación de la eficacia de los sistemas de control interno; y la realización y supervisión del control externo de las entidades del sector público.

[26] Respecto al control interno en particular, el artículo 15 de la Ley SAFCO dispone que *“la auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad...”*<sup>5/</sup> Este artículo, asimismo, dispone que los informes de esa unidad se remitirán ante la máxima autoridad ejecutiva de la institución y también a la Contraloría General del Estado, entre otros.

[27] En relación con la contratación del personal del MTILCC, el D.S. No. 26115, de aplicación a los Ministerios del Poder Ejecutivo, en su artículo 18, establece el proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual está *“fundamentado en los principios de merito, competencia y transparencia...”*<sup>6/</sup>

---

5. En este sentido, el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico y el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna del MTILCC, se encuentra publicado en la pagina en Internet del MTILCC disponible en: [www.transparencia.gob.bo/data/transparencia/UAI.pdf](http://www.transparencia.gob.bo/data/transparencia/UAI.pdf)

6. Véase el artículo 18 del D.S. No. 26115. Asimismo, véase el informe del Estado Plurinacional de Bolivia de la Segunda Ronda, páginas 2 a 4, para una mayor descripción de los procesos de reclutamiento en el Poder Ejecutivo. Este informe está disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic\\_II\\_inf\\_blv.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blv.pdf)



[28] En este sentido y con respecto a la determinación de los recursos necesarios para el funcionamiento del MTILCC, la respuesta del Estado analizado al cuestionario señala que “[t]oda vez que las atribuciones y la carga laboral del MTILCC se han incrementado con la aprobación del Decreto Supremo No. 29894 que establece la transformación del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a Ministerio, se ha hecho necesaria la contratación de mayor cantidad de personal, quien ha ingresado a trabajar a través de concurso de méritos en el caso de los consultores y del cumplimiento de los requisitos establecidos en los Programas Operativos Anuales Internos en el caso de los servidores pagados con dineros del Tesoro General del Estado. Es así que la contratación de nuevo personal obedece a la necesidad por la carga laboral y al presupuesto que se asigne.”<sup>7/</sup>

[29] En cuanto al personal del MTILCC, éste está sujeto a lo previsto en la Ley No. 2027 (Estatuto del Funcionario Público), cuyo objeto, entre otros, es asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública (artículo 2º) y, por lo tanto, al régimen de prohibiciones (artículo 9º), conflictos de interés (artículo 10) e incompatibilidades (artículo 11) allí contenidos, incluyendo la imposibilidad de realizar actividades políticas partidarias y de interés particular (solamente durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones (artículo 9º, b)). Esta Ley también contiene disposiciones relacionadas a la ética pública (artículos 12 al 15).

[30] Por su parte, el artículo 26 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley No. 004), intitulado “uso indebido de bienes y servicios públicos”, sanciona con privación de libertad a los funcionarios públicos por el mal uso de los bienes del Estado, mientras que el artículo 34 de la misma Ley reforma el artículo 154 del Código Penal incrementando la pena en la figura del “incumplimiento de deberes” que sanciona con privación de la libertad al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retarde un acto propio de sus funciones.

[31] Con respecto a los mecanismos para atender a reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño de su personal, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que “[e]l MTILCC cuenta con una plataforma de denuncias en la cual la ciudadanía puede presentar denuncias contra servidores del mismo Ministerio, además de una línea telefónica gratuita y su página Web donde existe un espacio específico en el cual se puede presentar denuncias ([www.transparencia.gob.bo](http://www.transparencia.gob.bo))”<sup>8/</sup>

[32] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones de su personal, el MTILCC cuenta con un “manual de funciones” para el personal de planta, “planes operativos individuales” para el personal eventual y “términos de referencia” para los consultores.<sup>9/</sup>

[33] Con respecto a la capacitación impartida por parte de la MTILCC, el artículo 27 del D.S. No. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo establece, entre las funciones específicas del Viceministerio de Prevención, la de elaborar y ejecutar programas de capacitación ciudadana (literal “e”), realizar acciones de capacitación sobre el control social y la rendición de cuentas (literal “f”); y capacitar a todas las entidades públicas con respecto a la preservación de información (literal “h”). Relacionado con lo anterior, la página en Internet del Viceministerio de Prevención contiene información<sup>10/</sup> sobre la capacitación impartida, incluyendo un resumen del número de talleres

---

7. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 15, *supra* nota 4.

8. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 21, *supra* nota 4.

9. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 16, *supra* nota 4.

10. Disponible en: [www.transparencia.gob.bo](http://www.transparencia.gob.bo)

realizados y de personas capacitadas en distintos temas, tales como el control social, acceso a la información, la Ley No. 004 y la ética pública. Asimismo, la misma página en Internet contiene un enlace al cronograma<sup>11/</sup> mensual de eventos de capacitación ofrecidos por el MTILCC.

[34] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas del MTILCC, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, pone de presente que el trabajo de este Ministerio se basa en el cumplimiento de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción<sup>12/</sup>. Asimismo, el MTILCC también cuenta con un reglamento interno “...que establece los lineamientos para el procesamiento de las denuncias presentadas ante esta instancia que permite el control del desempeño de las funciones de los servidores públicos que trabajan en esta entidad”<sup>13/</sup>.

[35] Con respecto al fortalecimiento institucional del MTILCC, durante la visita *in situ*, se puso de presente la transformación reciente de la institución, de ser antes un Viceministerio del Ministerio de Justicia, es ahora un Ministerio independiente, cuya máxima autoridad responde directamente al Presidente del Estado.

[36] Asimismo, en cuanto a la implementación y uso de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, el MTILCC cuenta con ~~dos~~ tres sistemas informáticos. El Sistema de Registro y Seguimiento de Denuncias que permite hacer un seguimiento de causas, mediante la sistematización de la información que señale cuando ingresó la causa en la institución, su estado de tramitación y a cargo de quién se encuentra; y el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) previsto en la Ley No. 004 y que servirá para “...la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción”<sup>14/</sup>. Asimismo, este último Sistema, el SIIARBE, que se encuentra pendiente de implementar, se utilizará también para determinadas actividades relacionadas con la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas<sup>15/</sup>. Durante la visita *in situ*, además, el MTILCC informó que el SIIARBE entrará en operación en un futuro cercano y que para ese fin, se está elaborando un decreto supremo que establezca su alcance, organización interna, atribuciones y procedimientos, tal como prevé el numeral III del artículo 23 de la Ley No. 004. También está el Sistema Automatizado de Registro de Correspondencia (SIACO) que registra toda la correspondencia que ingresa al Ministerio y el lugar donde ésta se encuentra. Además, el Ministerio está implementando herramientas tecnológicas para la seguridad perimetral de estos sistemas.

[37] Respecto de la manera de suministrar información a los ciudadanos, el MTILCC cuenta con su página en Internet [www.transparencia.gob.bo](http://www.transparencia.gob.bo), la cual contiene información relacionada con los antecedentes del Ministerio, sus actividades, los procesos de rendición pública de cuentas, legislación, incluyendo proyectos de ley, entre otras secciones.

[38] Asimismo, el MTILCC emite boletines informativos de circulación masiva, así como informes anuales comprehensivos.<sup>16/</sup> A este respecto, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes del MTILCC entregaron ejemplos de los siguientes boletines informativos: “Programa de

---

11. *Ibidem*.

12. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 18, *supra* nota 4.

13. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 18, *supra* nota 4.

14. Véase artículo 23, numeral I, de la Ley No. 004, disponible en: [www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_blv\\_resp.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_blv_resp.pdf)

15. Véase artículo 23, numeral II, de la Ley No. 004, *ibidem*.

16. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 20, *supra* nota 4.

Transparencia”, “La Rendición Pública de Cuentas”, “Y Tu Municipio es Transparente?”, “Ley No. 004”, “Participar Proponer Vigilar, eso es Control Social”, “Ética Pública”, “Control Social”, “Lucha Contra la Corrupción”, y “Acceso a la Información Pública”. En esa misma oportunidad, se hizo entrega también de ejemplares de guías elaboradas y distribuidas por el Ministerio, para el propósito específico de concientizar a los niños y jóvenes con respecto a los anteriores temas.

[39] Durante la visita *in situ*, el MTILCC también presentó varios videos, los cuales son transmitidos por las estaciones de televisión locales, y que están destinadas a sensibilizar a los ciudadanos con respecto a diversos temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la transparencia, incluyendo los temas de los mencionados anteriormente. Del mismo modo, los MTILCC entregó discos compactos que contienen mensajes similares de audio que se transmiten en emisoras de radio locales para el mismo propósito.

[40] Con respecto a la manera de garantizar los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento del MTILCC, en su respuesta el cuestionario el Estado analizado señala que “[e]l Presupuesto General de la Nación contempla presupuesto para cada una de las entidades públicas entre las que se encuentra el MTILCC. De igual manera el Ministerio suscribe convenios de cooperación internacional que aseguran los fondos para el cumplimiento de sus atribuciones.”<sup>17/</sup>

[41] Por cuanto a los mecanismos de coordinación con otros órganos del Estado y para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, el artículo 26 del D.S. No. 29894, en su literal “I”, encomienda al MTILCC el diseño de políticas de coordinación interinstitucional entre instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción. Asimismo, el literal “o” asigna al MTILCC la función de coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a la prevención, control, investigación y sanción de actos de corrupción. Específicamente, durante la visita *in situ*, el MTILCC describió la coordinación que se lleva a cabo con la Contraloría General del Estado en cuando al sistema de declaraciones de bienes y rentas<sup>18/</sup>.

[42] Asimismo, el artículo 6° de la Ley No. 004 crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, con las funciones, entre otras, de proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción. El numeral I del mismo artículo 6° dispone que este Consejo estará integrado por el MTILCC, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado y representantes de la sociedad civil organizada de acuerdo a la Constitución del Estado; mientras que el numeral II dispone que el mismo estará presidido por el titular del MTILCC.

[43] En relación con los mecanismos de rendición de cuentas respecto del MTILCC, el numeral 4 del artículo 235 constitucional establece la obligación de las servidoras y servidores públicos de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.

[44] Con ocasión de la visita *in situ*, el MTILCC entregó una guía informativa que detalla el proceso y los momentos de la rendición pública de cuentas, como de los mecanismos del “control social”<sup>19/</sup>,

---

17. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 22, *supra* nota 4.

18. Este tema se analiza de manera más detallada en la sección 2 del capítulo IV del presente informe.

19. De acuerdo con la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se entiende como “control social” de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona individual o

de la siguiente manera: 1) la audiencia pública “inicial” en la cual se convoca a las organizaciones y actores sociales a fin de poner a su consideración el denominado Programa Operativo Anual (POA) de la entidad y donde se priorizan los temas identificados por la población; 2) la audiencia pública “parcial” o “de medio año”, en la cual se presenta un informe sobre los avances y dificultades en la gestión y se reciben sugerencias de la población al respecto; y 3) la audiencia pública final en la que se dan a conocer los informes y documentación sobre los temas priorizados, como los resultados de los objetivos de la gestión y del presupuesto.

## **1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[45] El MTILCC cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[46] En primer lugar, el Comité denota que un porcentaje significativo del presupuesto del MTILCC es financiado mediante recursos externos, lo cual se puede observar en el documento “Ejecución Presupuestaria-Consolidado 2011”, disponible en el portal en Internet del MTILCC<sup>20/</sup>, que muestra que el 55.84% del presupuesto del MTILCC se financia por recursos que provienen de la Tesorería General de la Nación (TGN), el 41.14% del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 3.01% de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

[47] Asimismo, durante la visita *in situ*, se puso de presente que sólo 30 funcionarios del MTILCC eran financiados con recursos que provienen de la TGN, es decir, con recursos propios del Estado, razón por la cual el Ministerio destacó la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta actualmente, y que la mayoría de su personal se financia precisamente por contribuciones de donantes extranjeros, pero a partir de julio de 2012 se incrementó a 96 el número de servidores públicos en el MTILCC financiados con recursos del TGN en cumplimiento del D.S. No. 1186 de 9 de abril del 2012. Sin embargo, el Comité considera importante, sin perjuicio de este incremento reciente, que el Estado analizado tome las medidas que estime pertinentes para asegurar que el MTILCC cuente con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus muy larga funciones, teniendo presente, sobre todo, el rol tan importante que desempeña este órgano en materia de prevención y lucha contra la corrupción (véase recomendación 1.4.1 en el capítulo II de este informe).

[48] En segundo lugar, el Comité, con base en la información que fue puesta de presente durante la visita *in situ*, observa que existen ciertas disposiciones de la Ley No. 004 que requieren alguna forma de reglamentación adicional, como por ejemplo el artículo 26 de la misma que se refiere al uso indebido de bienes y servicios, toda vez que, como se explicó en la misma visita *in situ*, este artículo implica una sanción de uno a cuatro años de privación de libertad por cualquier infracción sin distinción, sea de acción u omisión, grave o menor. Sobre el particular, el Estado analizado manifestó que debido a que se está trabajando en la redacción del nuevo Código Penal, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, analizará la posibilidad de una nueva redacción mas precisa de este tipo penal. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.2 en el capítulo II del presente informe).

---

colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de sus objetivos.

20. Disponible en: [www.transparencia.gob.bo/data/ejecucion\\_presupuestaria2011.pdf](http://www.transparencia.gob.bo/data/ejecucion_presupuestaria2011.pdf)

[49] En tercer lugar, en cuanto a la figura de “incumplimiento de deberes” a que se refiere el artículo 154 del Código Penal, modificada por el artículo 34 de la Ley No. 004, se denota una situación similar a la descrita en el párrafo anterior, en relación con la pena que dicha disposición prevé y que consiste de uno a cuatro años de prisión. Al respecto, se puso de presente que el proyecto de nuevo Código Penal, entre otros aspectos, modificará y/o desarrollará el alcance y aplicación de dicha disposición. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.3 en el capítulo II del presente informe).

[50] En cuarto lugar, con relación al Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE), previsto en la Ley No. 004 y descrito en la sección anterior, el Comité sugiere que el Estado analizado continúe y culmine con la elaboración del decreto supremo que podría en funcionamiento este Sistema teniendo en cuenta los beneficios que éste brindará a partir de su implementación, particularmente con respecto a la coordinación entre los órganos de control responsables en la lucha contra la corrupción y en el sistema de declaraciones juradas de bienes y rentas. En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación (véase recomendación 1.4.4 en el capítulo II de este informe).

[51] En quinto lugar, el Comité también observa que la Ley No. 004 establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos (artículo 17). Sin embargo, durante la visita *in situ*, los representantes del MTILCC explicaron que se requiere de ciertas bases y reglamentos para poner en marcha este Sistema, poniendo de presente, igualmente, la dificultad que representa la ausencia del mismo, el cual, según lo manifestado, debiera abarcar también la protección de los servidores públicos responsables de la tramitación de denuncias, principalmente por delitos de corrupción toda vez que varios representantes del MTILCC informaron, durante la visita *in situ*, haber sido víctimas de agresiones y asaltos graves como resultado del cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en este campo. Con base en lo anterior, el Comité formulará una recomendación, tomando en cuenta la importancia que para Bolivia significa contar con un sistema adecuado de protección de denunciantes y testigos, sin perjuicio de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado analizado en la Primera Ronda y las cuales se examinarán en el Capítulo III de este informe (véase recomendación 1.4.5 en el capítulo II de este informe).

[52] Relacionado con lo anterior, durante la visita *in situ*, representantes de una asociación gremial, destacaron también la ausencia de un sistema de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, particularmente cuando éstos se relacionan con la ejecución de obras públicas que involucran grandes sumas de dinero, ya que, en la opinión del SIB, muchas veces se persigue a quienes denuncian.

[53] En sexto lugar, en cuanto a las necesidades de cooperación técnica, durante la visita *in situ*, los representantes del MTILCC identificaron las siguientes: apoyo para la elaboración de disposiciones reglamentarias de la Ley No. 004, incluyendo el establecimiento del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en el artículo 17 de la Ley; apoyo para la elaboración de una normativa específica en materia de repatriación de bienes producto de actos de corrupción. Asimismo, durante la visita *in situ*, el Ministerio identificó también pero como necesidades de asistencia mutua, la cooperación de los Estados en materia de extradición, expulsión u otras figuras similares, de personas con denuncias por hechos de corrupción; así como la cooperación y coordinación en el envío de información de bienes, cuentas bancarias y otros registros (financieros y de bienes), teniendo en cuenta que Bolivia actualmente no es integrante del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración lo anterior (véase recomendación 1.4.6 en el capítulo II de este informe).

[54] En séptimo lugar, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado identifica las siguientes dificultades relacionadas con el cumplimiento de las funciones del MTILCC: “*cambio constante de Fiscales de Materia Anticorrupción, debido al tiempo en que se tarda en la reasignación de los procesos y que el Fiscal asignado tome conocimientos de los antecedentes para la prosecución de la investigación. Tanto en el caso del Ministerio Público como en el Órgano Judicial la carga laboral por cada uno de los operadores de justicia que no permiten el cumplimiento efectivo de plazos lo que retrasa la tramitación de los procesos, además de la falta de presupuesto que permita implementar mayor cantidad de juzgados y fiscales en la División Anticorrupción, lo cual podría mejorar con la implementación de los jueces anticorrupción.*”<sup>21/</sup> Con base en lo anterior, durante la visita *in situ*, el MTILCC expresó que la demora en el establecimiento de los juzgados y tribunales anticorrupción, y en la designación de fiscales anticorrupción adicionales, está dando como resultado una retardación en la administración de justicia en casos de corrupción. El Comité formulará recomendaciones tomando en cuenta esta situación (véase recomendaciones 2.4.9 y 3.4.7 en el capítulo II de este informe)<sup>22/</sup>.

### 1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[55] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido el MTILCC en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:<sup>23/</sup>

[56] En primer lugar, respecto a las acciones relacionadas con la prevención de prácticas corruptas, en su respuesta al cuestionario, Bolivia puso de presente la elaboración, con amplia participación de la sociedad civil y sectores sociales, de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y las estrategias de promoción de ética y transparencia, así como del diseño del Programa de Transparencia en la Gestión Pública que se subdivide en los subprogramas relacionados con: 1) el acceso a la información, que incluye el monitoreo mensual del MTILCC de las páginas en Internet del Órgano Ejecutivo; 2) la rendición pública de cuentas y control social; y 3) la ética pública, que abarca, entre otras áreas, la elaboración de la denominada “estrategia de descolonización de la ética pública y revolución del comportamiento de las y los servidores públicos”, con lo cual es posible denotar que el MTILCC ha desarrollado acciones de prevención.

[57] En segundo lugar, en su respuesta al cuestionario<sup>24/</sup>, el Estado analizado también pone de presente que a través del seguimiento y monitoreo a los procesos judiciales con respecto a acciones que causan grave daño económico al Estado, el MTILCC ha recuperado mas de U.S. \$51 millones desde el 2006 hasta el 2011. Asimismo, durante el mismo periodo y a través de la ejecución de boletas de garantía,<sup>25</sup> se han recuperado mas de U.S. \$45 millones.

[58] En tercer lugar, en cuanto a las funciones del MTILCC relacionadas con la investigación y detección de actos de corrupción, la respuesta al cuestionario contiene información sobre el número de denuncias presentadas por el MTILCC hasta 2011<sup>26/</sup>, dicha información se encuentra actualizada en un cuadro publicado en el portal en Internet del MTILCC, el cual indica que hasta marzo de 2012,

---

21. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 40, *supra nota 4*.

22. Véase también las recomendaciones 2.4.4 y 2.4.7 correspondientes al Ministerio Público y las recomendaciones 3.4.7 a 3.4.9, correspondientes al Órgano Judicial, en las secciones 2.4 y 3.4, respectivamente, del presente informe.

23. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 30, *supra nota 4*.

24. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 31, *supra nota 4*.

25. Sobre el particular, véase el capítulo III del presente Informe, relativa a las buenas prácticas.

26. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 30, *supra nota 4*.

el MTILCC, de acuerdo a sus atribuciones, ha presentado 301 denuncias al Ministerio Público, 7 a la Inspectoría General, 5 al Consejo de la Magistratura, 9 a la Asamblea Legislativa y 1 ante la Dirección General de Investigación Policial<sup>27/</sup>, a objeto de que estas instancias realicen las investigaciones correspondientes y si es pertinente, se tomen acciones para el juzgamiento de acuerdo al caso. El mismo cuadro describe también en qué etapa del proceso se encuentra cada una de las denunciadas presentadas.

[59] De la información anterior con respecto a las funciones relacionadas con la investigación y detección de actos de corrupción, no se desprende la duración promedio de las denuncias presentadas por el MTILCC ante las distintas instancias que pudieran determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, de ser el caso, sin perjuicio de que en el marco de la visita *in situ*, el MTILCC puso de presente la existencia de varios factores que vienen provocando una retardación importante en la administración de justicia en el país. Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de que el Comité pueda contar con información desagregada que le permita realizar una valoración integral en cuanto a los resultados objetivos del MTILCC relacionados con sus funciones de detección e investigación de actos de corrupción, estima útil que el Estado analizado desarrolle mecanismos de monitoreo respecto de la eficiencia de las entidades competentes de tramitar denuncias relacionadas con actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación en este sentido (véase recomendación 1.4.7 en el capítulo II de este informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[60] Con base en el análisis integral realizado con respecto al MTILCC en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[61] El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al MTILCC como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[62] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Dotar al MTILCC con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la prevención, detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Analizar la posibilidad de prever una redacción más precisa de la tipificación dispuesta en el artículo 26 de la Ley No. 004, uso indebido de bienes y servicios, en la nueva norma penal que se está elaborando, y de proveer capacitación u otros lineamientos a los servidores públicos, con el objeto de profundizar su conocimiento respecto de las responsabilidades contempladas en las normas vigentes. (Véase la sección 1.2 del capítulo II del presente informe).

---

27. *Ibidem*.

- 1.4.3. Considerar la adopción de las disposiciones y medidas que estime necesarias que describan claramente el alcance y aplicación del tipo penal previsto en el artículo 154 del Código Penal vigente denominado “incumplimiento de deberes”, modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004. (Véase la sección 1.2 del capítulo II del presente informe).
- 1.4.4. Continuar y concluir la elaboración del proyecto de decreto supremo que implemente y ponga en funcionamiento el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) que incluya, entre otras, disposiciones sobre su alcance, organización interna, atribuciones, y procedimientos para la utilización y funcionamiento del Sistema. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Reglamentar, a través de los mecanismos que estime apropiados, el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos de actos de corrupción previsto en el artículo 17 de la Ley No. 004, incluyendo la protección física y laboral para los servidores públicos involucrados en la investigación y/o procesamiento de denuncias, sin perjuicio de las recomendaciones de la Segunda Ronda de Análisis. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Cuando, corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria de otros estados y organismos de cooperación para que el MTILCC pueda cumplir sus funciones de manera más eficaz, tomando en cuenta las necesidades puestas de presente e identificadas en la sección 1.2 de este informe. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Desarrollar mecanismos de monitoreo que permitan al MTILCC determinar la eficiencia de las entidades competentes de tramitar denuncias relacionadas con actos de corrupción, para así diseñar, implementar o recomendar, según corresponda, las acciones necesarias para agilizar y mejorar la eficiencia en la tramitación de los procesos iniciados a partir de estas denuncias. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).

## **2. MINISTERIO PÚBLICO**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[63] El Ministerio Público cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[64] En cuanto a su objetivo y funciones, el artículo 225 constitucional dispone que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública y gozará de autonomía funcional, administrativa y financiera.



[65] Asimismo, la Ley No. 2175 Orgánica del Ministerio Público (LOMP) de 2001<sup>28/</sup>, que regula hasta ahora la organización y atribuciones Ministerio Público, le asigna a éste, para el cumplimiento de sus obligaciones, las siguientes funciones: defender los intereses del Estado y la Sociedad; ejercer la acción penal pública y la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de delitos; informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre los resultados de las investigaciones, así como al imputado sobre sus derechos y garantías; asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos; velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena en las leyes o acuerdos internacionales; prestar la cooperación judicial internacional y preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos (artículo 14).

[66] El artículo 20 de la LOMP de 2001 regula la coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, disponiendo que el Poder Ejecutivo podrá, mediante resolución fundada, solicitar al Fiscal General, máxima autoridad del Ministerio Público, la emisión de instrucciones generales relativas al ejercicio de la acción penal pública, al establecimiento de prioridades en la persecución penal y al respeto de los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia. El artículo 22 de la misma Ley, le permite al Ministerio Público objetar la resolución ante el Tribunal Constitucional, si se considera que es inconstitucional o que afecte su independencia. Este mismo artículo faculta al Fiscal General, de considerar que la resolución es inconveniente o ilegal, objetar su cumplimiento ante la autoridad emisora.

[67] El Ministerio Público también tiene la obligación de prestar la cooperación necesaria a las autoridades de las comunidades originarias, indígenas y campesinas que así lo requieran, de acuerdo con el artículo 17 de la LOMP de 2001.

[68] Con respecto al ejercicio de sus funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, el artículo 12 de la LOMP de 2001 prevé el establecimiento de las Comisiones Legislativas por las Cámaras de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, para la investigación y promoción de la acción penal pública contra los ahora magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General del Estado, los magistrados del actual Tribunal Constitucional Plurinacional y miembros del ahora Consejo de la Magistratura. En este sentido, el artículo 13 de la LOMP de 2001 requiere la colaboración en la investigación por parte de los fiscales del Ministerio Público, a requerimiento de tales Comisiones Legislativas.

[69] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes del Ministerio Público informaron sobre algunas excepciones al ámbito de su competencia previstas en la Ley No. 044 de 2010 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. También se informó sobre la existencia de la jurisdicción militar en donde existe una tipicidad propia y fiscales militares, fuera del ámbito del Ministerio Público.<sup>29/</sup>

[70] Con relación a la adopción de decisiones en el Ministerio Público, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado indica que “[d]entro de las investigaciones que realizan las decisiones son adoptadas por cada Fiscal de acuerdo a la prueba que recolecta durante dicha

---

28. Durante la reunión del Subgrupo de Análisis Preliminar celebrada en la sede de la OEA, en Washington, D.C., el 6 de septiembre de 2012, el Estado analizado puso de presente que el 11 de julio de 2012 fue promulgada la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley No. 260). Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis que se realiza en la presente sección está basado en la Ley No. 2175 Orgánica del Ministerio Público (LOMP) de 2001.

29. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 12, *supra nota 4*

*investigación. No son instancias colegiadas, sino que se trata de una entidad que tiene estructura jerárquica, donde el Fiscal General del Estado es la autoridad superior. Las decisiones adoptadas son revisadas por el superior jerárquico.”*<sup>30/</sup> Igualmente, con ocasión de la visita *in situ*, se informó que el Código de Procedimiento Penal (CPP), aprobado por la Ley No. 1970 de 1999, contiene las bases para objetar e impugnar las decisiones de los fiscales ante su superior jerárquico en casos particulares (artículos 305 y 306 del CPP).

[71] Con respecto a la máxima autoridad del Ministerio Público, la CPE establece que el o la Fiscal General es la autoridad jerárquica superior del mismo (artículo 226), quien se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa (artículo 227). La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público. El o la Fiscal General ejercerá sus funciones por seis años (artículo 228) y sólo podrá ser destituido en virtud de una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por la Cámara de Senadores (artículo 35 de la LOMP).

[72] Asimismo, la Ley No. 003 de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, en su artículo 5º, prorroga la suplencia legal del Fiscal General, hasta su designación conforme a la nueva CPE y Ley del Ministerio Público.

[73] En cuanto a los Fiscales de Distrito, el artículo 39 de la LOMP de 2001 prevé su designación por dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados y que ejercerán sus cargos por cinco años.

[74] Con respecto a los fiscales, el artículo 87 de la LOMP de 2001 establece que la carrera fiscal está basada en el reconocimiento de méritos y acreditación, y que los procesos de convocatoria interna o externa surgirán de las necesidades del servicio y las vacantes en el Ministerio Público. Por su parte, el artículo 88 de la misma Ley prevé que los fiscales sólo podrán ser removidos por los casos señalados por ley. Asimismo, la LOMP contiene disposiciones aplicables a fiscales, referentes a impedimentos (artículo 26), incompatibilidades (artículo 27) y prohibiciones (artículo 28).

[75] Asimismo, el numeral II del artículo 5º de la Ley No. 003 dispone que “[e]n caso de cumplimiento de mandato de los Fiscales de Distrito en el periodo de transición, corresponderá al Fiscal General de la República nombrar directamente de manera interina a los Fiscales que ejercían estos cargos.”

[76] Específicamente, en materia anticorrupción, la Ley No. 004, en su artículo 12, señala que el Fiscal General designará en cada Departamento del país a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados. Con respecto a estos fiscales especializados, el artículo 14 de la misma Ley No. 004 dispone que éstos estarán sujetos a un sistema de evaluación permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para garantizar la probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, y que en este sistema participará el denominado “control social”.

[77] Asimismo, se destaca que en enero de 2011 fueron creadas las Unidades Especializadas en la Persecución de los Delitos de Corrupción en contra de Funcionarios y Ex Funcionarios del Órgano Judicial y en contra de Fiscales y Ex Fiscales del Ministerio Público, a través de las Resoluciones No. 11/2011 y No. 12/2011 del Ministerio Público, respectivamente.

---

30. *Ibidem*, p. 12.

[78] Con respecto a la manera en que son provistos otros cargos en el Ministerio Público, el artículo 36, numeral 16, de la LOMP de 2001 establece que el Fiscal General es responsable por la designación del personal administrativo conforme a reglamento.

[79] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones de su personal, el Ministerio Público cuenta con los Reglamentos Interno, de Planificación e Ingreso a la Carrera Fiscal, de Evaluación y Promoción de la Carrera Fiscal, de Organización y Funcionamiento de la Inspectoría General y Régimen Disciplinario y de Organización y Funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, el Ministerio Público presentó su Informe de Actividades correspondiente a la gestión 2011, el cual pone de presente la elaboración del Reglamento Interno del Sistema de Administración de Personal, que será actualizado y posteriormente implementado. En dicho informe también se menciona que el Manual de Funciones del Ministerio Público será adecuado a la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

[80] Con respecto a la capacitación, el artículo 36, numeral 34 de la LOMP de 2001 establece como atribución del Fiscal General, la designación del Director del Instituto de Capacitación del Ministerio Público, mientras que el artículo 92 establece el Subsistema de Capacitación, para la formación y actualización permanente de los fiscales, el cual “*propicia su especialización en las funciones propias del cargo y en su caso en la persecución de determinados delitos.*”<sup>31/</sup> En este sentido, con ocasión de la visita *in situ*, el Ministerio Público informó que, conformidad con la Ley No. 004, se viene realizando talleres de capacitación para los fiscales anticorrupción especializados. Asimismo, se informó que se ha celebrado un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y el MTILCC para el desarrollo de un diplomado a nivel universitario específicamente para los fiscales anticorrupción, en el que también participaron policías y personal del MTILCC, este diplomado concluyó el 31 de julio del presente año.

[81] En cuanto a los manuales y procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas y acciones de fortalecimiento institucional, con ocasión de la visita *in situ*, el Ministerio Público puso de presente la existencia de la Política de Persecución Penal; los Instructivos 341/2006, 169/2010 sobre lineamientos para mejorar la persecución penal y 871/2011 de optimización de la política de persecución penal; el Manual de Actuaciones para Policías, Fiscales y Peritos; y el Plan Quinquenal 2006-2009. Se puso de presente, igualmente, que el Ministerio Público cuenta también con manuales y protocolos en las Divisiones del Instituto de Investigaciones Forenses, y que se han desarrollado protocolos y hojas de ruta crítica para la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.

[82] Con respecto a la implementación de sistemas o tecnologías modernas, el Ministerio Público cuenta con el Sistema I3P, la cual consiste en un *software* para el seguimiento de causas y de uso obligatorio por todos los fiscales, que permite el control de los procesos penales, sirviendo como herramienta para realizar actividades investigativas.<sup>32/</sup>

[83] Sobre la manera de suministrar información a los ciudadanos, el Ministerio Público cuenta con su página en Internet, disponible en [www.fiscalia.gob.bo](http://www.fiscalia.gob.bo), además de emitir boletines informativos de circulación masiva e informes anuales comprehensivos.<sup>33/</sup>

---

31. Véase artículo 92 de la Ley No. 2175 Orgánica del Ministerio Público, disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

32. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 18, *supra* nota 4.

33. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 20, *supra* nota 4.

[84] En cuanto a los mecanismos de control interno, el artículo 84 de la LOMP de 2001 establece que la Inspectoría General es el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Público para asegurar y promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines. Dicho artículo también dispone que la misma Inspectoría gozará de autonomía funcional en el desempeño de sus funciones, las cuales, de acuerdo con el artículo 86 de la misma LOMP de 2001, son, entre otras, recibir denuncias contra fiscales (numeral 1); formular y ejecutar programas de inspecciones (numeral 4); realizar investigaciones de oficio o por denuncia (numeral 5); presentar denuncias contra fiscales cuando se tengan elementos de sospecha sobre la comisión de delitos (numeral 7); y desarrollar programas permanentes de prevención de actos de corrupción (numeral 8).

[85] Sumado a lo anterior, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que “...*existen plataformas de atención al público que constituye la puerta principal de acceso para los usuarios y están destinadas a brindar la orientación e información para el ingreso al sistema de administración de justicia penal, es la encargada de velar por los derechos y garantías de la partes, presta la primera asistencia a la víctima y realiza el trámite inicial en el ejercicio de la acciones penal pública.*”<sup>34/</sup>

[86] Respecto a la manera de garantizar los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 225 constitucional concede autonomía financiera al Ministerio Público. Por su parte, el artículo 124 de la LOMP de 2001 dispone que la Fiscalía General elaborará el proyecto de presupuesto del Ministerio Público y que lo administrará de manera autónoma. En este sentido, el numeral 25 del artículo 36 de la LOMP de 2001, establece como una de las atribuciones del Fiscal General, la elaboración del presupuesto anual y su envío al Ministerio de Hacienda para su incorporación en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación.

[87] En relación con los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos, el Reglamento Interno del Ministerio Público, en su título II, “De Las Relaciones Con los Poderes e Instituciones del Estado”, capítulos I, II, III, IV y V, se refiere a las relaciones con los ahora Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, así como con el Defensor del Pueblo y la Administración Pública, respectivamente.

[88] En lo concerniente a la rendición de cuentas, el artículo 37, numeral 1 de la LOMP de 2001, obliga al Ministerio Público a dar cuenta de sus acciones ante el Órgano Legislativo por lo menos una vez al año, mientras que el numeral 2, establece que el Fiscal General deberá informar a la sociedad sobre sus actividades, dificultades y logros en el ejercicio de su gestión, al menos cada seis meses. Por su parte, los numerales 3 y 4 obligan al Ministerio Público a recopilar y publicar los reglamentos, instrucciones generales e instrucciones particulares ratificadas, así como los requerimientos y resoluciones de mayor relevancia; y a publicar su informe anual, respectivamente.

[89] En cumplimiento de lo anterior, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se explica que “[e]l informe [anual] comprende las principales acciones emprendidas, los resultados, dificultades, retos y proyecciones institucionales, actividades en cuestiones jurídicas y administrativas, coordinación y relacionamiento con los Órganos del Estado, Instituciones, y las Fiscalías de Distrito de todo el Estado, y también con otros Ministerios Públicos y Procuradurías Generales de otros países, lo que permite transparentar nuestras acciones y rendir cuentas a la sociedad.”<sup>35/</sup>

---

34. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 21, *supra* nota 4.

35. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 26, *supra* nota 4.

## 2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[90] El Ministerio Público cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[91] En primer lugar, con respecto a la designación del Fiscal General, el Comité toma nota que el artículo 226 constitucional dispone la designación del mismo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, durante la visita *in situ*, se informó que el actual Fiscal General funge en calidad de interino desde 2006. Asimismo, de acuerdo con la Ley No. 003 de 2010, este interinato seguirá hasta tanto la Asamblea Legislativa designe al nuevo Fiscal General de conformidad con la CPE y la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público pendiente de promulgación.

[92] Con base en lo anterior, preocupa al Comité que a más de dos años de la Ley No. 003 aún no se haya promulgado la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público<sup>36/</sup> y, por lo tanto, no se haya designado al nuevo Fiscal General en cumplimiento de la CPE. Existe una situación similar con respecto a los nueve Fiscales de Distrito, que se han venido desempeñando en forma provisional a través de una designación por un prolongado período, pese al hecho de que la LOMP requiere que sean designados por la Cámara de Diputados. En este sentido, el Comité considera de gran importancia que el Estado analizado adopte las medidas que estime necesarias a fin de institucionalizar el nombramiento del o la Fiscal General conforme a lo previsto en la CPE. Lo anterior, contribuiría a asegurar la autonomía del Ministerio Público, y por ende, el adecuado cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase recomendación 2.4.1 en el capítulo II de este informe).

[93] En segundo lugar, teniendo presente que con posterioridad a 2001, año en que se expidió la LOMP vigente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado cambios significativos y sustanciales en su régimen jurídico-institucional, destacándose la nueva CPE en 2009 y la Ley No. 004 en 2010, el Comité observa que ésta última requiere la designación de fiscales anticorrupción por parte del Ministerio Público, como se mencionó en la sección anterior. No obstante, pese a que ya se han designado varios de estos fiscales, el Comité, con base en lo expresado por el Ministerio Público durante la visita *in situ* en relación con la convocatoria para designar a más de estos fiscales que no prosperó debido a la falta de disposiciones pertinentes en la LOMP, considera también importante que el Estado analizado adopte las medidas que estime apropiadas para que el Ministerio Público cuente con disposiciones que se adecuen al nuevo régimen jurídico y constitucional del Estado, que le permita, entre otros aspectos, cumplir con la obligación prevista en la Ley No.004 respecto de la designación de los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta lo anterior (véase recomendación 2.4.2 en el capítulo II de este informe).

[94] En tercer lugar, en términos de dificultades para el logro de los propósitos del Ministerio Público, tanto en la respuesta del Estado analizado al cuestionario como en la reunión sostenida con los representantes del Ministerio Público con ocasión de la visita *in situ*, quedó claro que el principal problema que enfrenta esta entidad es la falta de recursos económicos, que a su vez, se traduce en la

---

36. Véase *supra* nota 28.

limitante que imposibilita contratar mas personal, el cual podría dar lugar a investigaciones mas rápidas y eficientes.<sup>37/</sup>

[95] Durante la visita *in situ* los representantes del Ministerio Público profundizaron sobre este tema, expresando que la falta de recursos combinada con el incremento sustancial de la carga de trabajo del Ministerio Público, ha provocado un atraso considerable en la tramitación de las causas. Al respecto, los mismos representantes señalaron que el tema presupuestario “...es uno de los puntos más álgidos para el Ministerio Público, debido a que el presupuesto asignado por el TGN, siempre ha sido insuficiente para cubrir las diferentes partidas de gasto, tal es el caso recursos humanos, equipamiento, infraestructura, medios de investigación, gastos de investigación e investigación pericial.”<sup>38/</sup>

[96] Con base en lo anterior y en la información que ha tenido a su disposición, el Comité considera que la falta de recursos humanos y financieros afecta en gran medida la capacidad del Ministerio Público de cumplir con sus funciones y responsabilidades de manera eficiente y efectiva, y por consiguiente aquellas atinentes a la investigación de actos de corrupción. A manera de ejemplo, y con respecto a los fiscales anticorrupción, el documento presentado por el Ministerio Público con ocasión de la visita *in situ*, expresa lo siguiente: “No ha existido partidas presupuestarias específicas en el presupuesto del MP para implementar las fiscalías especializadas, pese a que el MP ha presentado un proyecto a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que aún no ha sido considerado favorablemente.”<sup>39/</sup> No obstante lo anterior, los representantes del Ministerio Público también durante la visita *in situ* expresaron su preocupación de que este problema presupuestario podría afectar también el ejercicio de la autonomía constitucionalmente dotada a la entidad. El Comité formulará una recomendación con base en las anteriores consideraciones (véase recomendación 2.4.3 en el capítulo II de este informe).

[97] Durante la visita *in situ*, los representantes del Ministerio Público señalaron, como una dificultad más para el logro de los propósitos este órgano de control, la considerable mora en la administración de justicia que, de acuerdo con ellos, existe actualmente en el país, expresando además que dicha situación podría considerarse como un colapso del sistema judicial en el Estado analizado (véase recomendaciones 3.4.7 y 3.4.8, correspondientes al Órgano Judicial, en el capítulo II de este informe).

[98] En cuarto lugar, con relación al atraso en la tramitación de causas ante el Ministerio Público que menciona el Estado analizado en su respuesta al cuestionario y que posteriormente se reiteró durante la visita *in situ*, el Comité considera, con base en la información que tuvo a su disposición, como posibles causas de ello, la frecuente reasignación de fiscales anticorrupción a fiscales de materia y viceversa, que puede dar como resultado demoras adicionales en la tramitación de casos, así como la ausencia de un sistema aleatorio para la asignación de casos a los fiscales que fue hecha del conocimiento durante la visita *in situ*, el cual contribuiría al fortalecimiento del trabajo desarrollado por el Ministerio Público. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta las anteriores consideraciones (véase recomendación 2.4.4 en el capítulo II de este informe).

---

37. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 40, *supra nota* 4.

38. Véase el documento presentado por el Ministerio Público con ocasión de la visita *in situ*, p. 9., disponible en: [www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_blv\\_MP.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_blv_MP.pdf)

39. *Ibidem*, p. 16.

[99] En quinto lugar, en cuanto a los mecanismos de control interno, el Comité toma nota de lo expresado por los representantes del Ministerio durante la visita *in situ* respecto al desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre la existencia de la Inspectoría General. En este sentido, los representantes del Ministerio Público señalaron que las distintas entidades del propio Ministerio reciben constantemente denuncias sobre presuntos hechos y delitos cometidos por fiscales, siendo que la tramitación de estas denuncias es competencia de la Inspectoría General. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta la importancia de que existe conocimiento de parte del público en general de la existencia de una entidad que ejerce el control interno y a la cual pueden formular quejas o denuncias respecto del Ministerio Público (véase recomendación 2.4.5 en el capítulo II de este informe).

[100] En sexto lugar, el Comité observa que desde que se recibió la respuesta del Estado analizado al cuestionario hasta la fecha, el portal en Internet del Ministerio Público ([www.fiscalia.gob.bo](http://www.fiscalia.gob.bo)), el cual debe servir principalmente, según la información provista por el Estado analizado, como una plataforma útil para suministrar información sobre los objetivos y funciones del Ministerio Público; la manera de cómo tramitar causas y formular denuncias ante el mismo; e información relacionada con la rendición pública de cuentas, actualmente se encuentra habilitado sólo para publicar algunas notas de prensa y ciertos documentos relacionados con convocatorias públicas. Esta situación, por lo tanto, imposibilita la consulta de información importante para el público en general, como la señalada por el mismo Estado analizado en su respuesta, así como las leyes y reglamentos que lo rigen, sus informes de gestión y rendiciones de cuentas, entre otros. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta lo anterior (véase recomendación 2.4.6 en el capítulo II de este informe).

[101] En séptimo lugar, el Comité toma nota de las necesidades de cooperación técnica manifestadas por el Ministerio Público durante la visita *in situ* consistentes en la necesidad de apoyo técnico y financiero para contar con peritos especializados en distintas materias, así como en el desarrollo de técnicas especializadas para la investigación de casos de corrupción. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (véase recomendación 2.4.7 en el capítulo II de este informe).

[102] Finalmente, y con respecto a las técnicas de investigación especializadas a las que se hace referencia más arriba, el Comité observa que el Estado analizado señaló que conforme a la ley, técnicas tales como el uso de agentes encubiertos, interferencias telefónicas, etc. sólo se permiten para investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y otras sustancias controladas. A ese respecto el Comité considera que podría ser conveniente que el Estado analizado considere la posibilidad de ampliar el uso de técnicas de investigación especializadas para casos de corrupción, y formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 2.4.8 en el capítulo II del presente informe).

### **2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[103] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y en el marco de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido el Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:<sup>40/</sup>

[104] En el período 2005-2009 se tramitaron 5,186 causas por presuntos actos de corrupción ante el Ministerio Público, de las cuales 1,626 han concluido y 3,560 continúan abiertas. De las 1,626 causas concluidas, el Estado analizado informó en su respuesta que 1,024 concluyeron por rechazo, 210 por

---

40. Información adicional sobre resultados fue presentada por el país analizado en la respuesta al cuestionario, y con ocasión de la visita *in situ*. Esta información puede ser consultada en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

sobreseimiento, 223 por salidas alternativas, 140 por otras causas (artículo 27 del CPP) y únicamente 29 por sentencia.<sup>41/</sup> Respecto a la gestión 2010, el Estado analizado informó en su misma respuesta que las causas ingresadas en trámite al inicio de esa gestión fueron 869 y el número de causas nuevas ingresadas fueron 1,360 por lo que el total de causas para dicha gestión 2010 fueron 2,229.<sup>42/</sup> Asimismo, manifestó que la Fiscalía Especializada en la Lucha contra Delitos de Corrupción para la gestión 2011 registró un total de 1,954 causas nuevas, habiendo emitido un total de 1,474 resoluciones<sup>43/</sup> y requerimientos en diferentes etapas del proceso.<sup>44/</sup>

[105] El Comité, no obstante la anterior información que ofrece algunas cifras sobre el estado que guardan las causas de corrupción tramitadas ante el Ministerio Público en las gestiones anteriormente citadas, incluyendo cuantas continúan abiertas o en trámite y cuantas han concluido o resuelto y la forma en que fueron resueltas, no identifica el número de causas prescritas por no haber sido resueltas en los términos establecidos, ni el número de causas archivadas sin que se haya adoptado una decisión de fondo sobre las mismas. Poder contar con tales cifras se vuelve todavía más importante, considerando la dilación que existe tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial en cuanto la tramitación y resolución de causas, la cual fue puesta de presente durante la visita *in situ* y se menciona en las secciones 2.2 y 3.2 del presente informe, respectivamente. Tomando en cuenta esta situación, el Comité formulará una recomendación (véase recomendación 2.4.9 en el capítulo II de este informe).

[106] En cuanto a la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción, el Informe de Gestión correspondiente al 2011, expresa que “La FEPDC registró en la gestión 2011 un total de 1954 causas nuevas, encontrándose 1749 casos de anteriores gestiones en trámite, haciéndose un total general de 3693 causas.” El mismo informe explica que esta Fiscalía cuenta con 35 fiscales anticorrupción. Con base en estas cifras, el Comité observa que el promedio de casos asignados a cada uno de los fiscales anticorrupción es mayor a 100. Por lo tanto, el Comité estima importante que el Estado analizado considere aumentar el número de fiscales anticorrupción con el fin, entre otros, de que las causas de corrupción cuenten con un trámite procesal eficiente y expedito. En este contexto, el Comité destaca lo expresado por los representantes del MTILCC durante la visita *in situ*, en el sentido de que la demora en la designación de fiscales anticorrupción adicionales está dando como resultado una retardación en la administración de justicia. Asimismo, se sostuvo que la falta de espacio físico para el archivo de expedientes es insuficiente, lo que genera problemas logísticos. En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación (véase recomendación 2.4.10 en el capítulo II de este informe).

## 2.4. Conclusiones y recomendaciones

[107] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Ministerio Público en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[108] El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Ministerio Público como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.**

---

41. Información adicional sobre resultados fue presentada por el país analizado en la respuesta al cuestionario, y con ocasión de la visita *in situ*, p. 31, *supra* nota 35.

42. *Ibidem*.

43. El concepto “resoluciones” se refiere a actuaciones investigativas emitidas por el Ministerio Público.

44. Op. cit. 41, *supra*.



[109] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Considerar la adopción de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público<sup>45/</sup> y las demás medidas que estime necesarias a fin de institucionalizar el nombramiento del o la Fiscal General por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a lo previsto en el artículo 227 constitucional y de los Fiscales de Distrito en la forma preceptuada por la ley y con ello asegurar la autonomía del Ministerio Público, y por ende, el adecuado cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Adoptar las medidas necesarias para contar con disposiciones que reglamenten la contratación, designación y el funcionamiento de los fiscales anticorrupción previstos en la Ley 004, ya sea a través de la expedición de una nueva ley del Ministerio Público, a través de las enmiendas necesarias a Ley existente, o a través de las medidas que se consideran pertinentes. (Ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Promover que se dote al Ministerio Público con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Fortalecer el procedimiento para la asignación de causas a los fiscales de materia y a los fiscales especializados en delitos de corrupción, procurando evitar la reasignación de los mismos, salvo en los casos previstos por ley, y a través de la implementación de un sistema que les asigne las causas de manera aleatoria e imparcial. (Véase secciones 1.2 y 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Realizar campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía, para aumentar el conocimiento de la existencia de la Inspectoría General, sus funciones, y la manera de presentar denuncias ante la misma. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Adoptar las medidas estime necesarias para que el portal en Internet del Ministerio Público ([www.fiscalia.gob.bo](http://www.fiscalia.gob.bo)) sea efectivamente una herramienta útil para la disseminación, entre otras, de información sobre la entidad, la forma de hacer gestiones ante la misma y para el proceso de rendición pública de cuentas. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Cuando corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria de otros estados y agencias de cooperación para que el Ministerio Público pueda cumplir sus funciones de manera más eficaz, particularmente con respecto a la obtención de peritos especializados y el desarrollo de las técnicas especializadas en la investigación disponibles para su uso legal en casos de corrupción. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).

---

45. Véase *supra* nota 28.

- 2.4.8. Considerar la posibilidad de ampliar el uso de técnicas de investigación independientes que actualmente sólo se permiten para investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y otras sustancias controladas en investigaciones sobre corrupción. (Véase la sección 1.2 del capítulo II del presente informe).
- 2.4.9. Desagregar la información estadística referida a las actividades de detección de la comisión de actos de corrupción, de tal manera que se pueda contar con cifras sobre cuántas causas han prescrito o desestimado por no haber sido concluidas en los términos establecidos, así como el número de causas que han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre las mismas. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Fortalecer la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción a través del incremento de asignaciones de fiscales anticorrupción que sea necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente para que las causas por presuntos hechos de corrupción cuenten con un trámite procesal eficiente y expedito. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).

### 3. ÓRGANO JUDICIAL

#### 3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[110] El Órgano Judicial cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[111] En cuanto a sus objetivos y funciones, la respuesta del Estado analizado al cuestionario señala que “[s]u función es jurisdiccional, es decir, administrar justicia. La función fundamental de los jueces es definir el Derecho, que consiste en la aplicación de las leyes vigentes del Estado, y cuando éstas no son lo suficientemente explícitas o no existieran, debe basarse en leyes análogas, usos y costumbres, o en los principios generales del Derecho, la interpretación del espíritu del legislador y en la ley fundamental, que es la constitución Política del Estado.”<sup>46/</sup>

[112] Con respecto al ejercicio de sus funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, la respuesta del Estado analizado señala que no existe tal concurrencia.<sup>47/</sup> Al respecto, los artículos 179 constitucional y 4° de la Ley No. 025 del Órgano Judicial de 2010 (Ley No. 025) disponen que la función judicial es única en todo el territorio del Estado analizado y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de las siguientes jurisdicciones: jurisdicción ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los juzgados; jurisdicción agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales; jurisdicciones especiales reguladas por ley; y la jurisdicción indígena originaria campesina, por sus propias autoridades, normas y procedimientos. Ambos artículos disponen además que la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional y que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina tienen igual jerarquía. Asimismo, el artículo 179 constitucional dispone que el Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial.

---

46. *Ibidem*, p. 10, *supra* nota 4.

47. *Ibidem*, p. 13, *supra* nota 4.

[113] Con respecto a la autonomía del Órgano Judicial, el artículo 178 constitucional dispone que el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales constituyen garantías de la independencia judicial. Por su parte, el artículo 2° de la Ley No. 025 prevé que el Órgano Judicial “...tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación.” Asimismo, el artículo 7° de la misma Ley No. 025 dispone que el Órgano Judicial tendrá autonomía presupuestaria en su jurisdicción ordinaria y agroambiental y el control y fiscalización del manejo administrativo y financiero es responsabilidad del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio del control a cargo de la Contraloría General del Estado.

[114] En materia anticorrupción, la Ley No. 004, el numeral I de su artículo 11, prevé la creación de los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados. El mismo artículo, en su numeral II, dispone que el Consejo de la Magistratura designará en cada departamento del país el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos.

[115] Con respecto a la existencia de excepciones al ámbito competencial del Órgano Judicial, la propia CPE dispone que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios, ni tribunales de excepción y que la jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por ley (artículo 180, numeral III, constitucional).

[116] Sobre la adopción de decisiones en el Órgano Judicial y los recursos de revisión que proceden en contra de las mismas, el Estado analizado señala en su respuesta que “[d]entro de los procesos que llevan cada uno de los jueces, las decisiones que adoptan se respaldan en las leyes y en la prueba que se obtenga dentro de los mismos. Solamente en caso de que exista un recurso planteado por alguna de las partes que no se encuentre conforme con la decisión del juez, la decisión tomada por este puede ser cambiada de acuerdo a la que tome el superior, este derecho de recurrir a instancias superiores está garantizado por el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se encuentra en el párrafo II del art. 180 de la Constitución Política del Estado. En estos casos las decisiones se toman por los tribunales en forma colegiada.”<sup>48/</sup>

[117] El artículo 181 constitucional dispone que el TSJ es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la CPE prevé que los magistrados que conforman a éste serán elegidos por sufragio universal (artículo 182, párrafo I, constitucional) y que la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará la preselección de los postulantes por dos tercios de votos de los miembros presentes (artículo 182, párrafo II, constitucional). El periodo de mandato de los magistrados del TSJ será de seis años, y no podrán ser reelegidos (artículo 183, párrafo I, constitucional).

[118] El artículo 182 constitucional contiene los requisitos para ser magistrado del TSJ (párrafo VI) y establece que el sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los mismos es igual al que rige para los servidores públicos. Por su parte, el artículo 18 de la Ley No. 025 contiene los requisitos para el ejercicio de cualquier cargo en la jurisdicción ordinaria y agroambiental, mientras que el artículo 9° contiene las prohibiciones y causales de inelegibilidad. Asimismo, el artículo 22 contiene un listado de incompatibilidades en cuanto al ejercicio de la función judicial.

[119] Respecto a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del Órgano Judicial, el numeral I del artículo 84 de la Ley No. 025 prevé que las servidoras o servidores de apoyo judicial son designados por el Consejo de la Magistratura con base

---

48. *Ibidem*, p. 18, *supra* nota 4.

en concursos de méritos y exámenes de competencia. Asimismo, el numeral II del mismo artículo faculta al Consejo de la Magistratura, en coordinación con el TSJ y los Tribunales Departamentales, a designar más de una servidora o servidor de apoyo judicial.

[120] En cuanto a los controles internos del Órgano Judicial, el artículo 193 constitucional designa al Consejo de la Magistratura como la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión.

[121] Respecto de lo anterior, el artículo 195 constitucional señala, como funciones del Consejo de la Magistratura, entre otras, las siguientes: promover la revocatoria de mandato de los magistrados del TSJ y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley (numeral 1); ejercer el control disciplinario de otros funcionarios del Órgano Judicial (numeral 2); controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los bienes del Órgano Judicial (numeral 3); evaluar el desempeño de funciones de los funcionarios del Órgano Judicial (numeral 4); elaborar auditorías (numeral 5); y realizar estudios técnicos y estadísticos (numeral 6).

[122] En cuanto a documentos y manuales que describen las funciones del personal del Órgano Judicial, el Estado analizado pone de presente en su respuesta al cuestionario la existencia de los Reglamentos del Órgano Judicial de Administración y Control de Personal; de Administración de Multas por Faltas, Atrasos y Sanciones Disciplinarias; Específico del Subsistema de Evaluación y Permanencia para el Personal Administrativo; y de la Carrera Judicial.<sup>49/</sup>

[123] Con relación a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas y de acciones para el fortalecimiento institucional del Órgano Judicial, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado destaca la existencia del sistema informático denominado IANUS, “...cuyo objetivo es mantener actualizada la información estadística, sobre el registro de causas en los diferentes juzgados de la capital, fundamentalmente en materia penal.”<sup>50/</sup> Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes del Órgano Judicial explicaron que el IANUS también sirve para dar seguimiento a los procesos judiciales, así como para evitar retrasos en cuanto a esos procesos.

[124] Igualmente, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes del Órgano Judicial también explicaron que en aras de promover e incrementar la transparencia, se han creado unidades de transparencia<sup>51/</sup> en el TSJ y en sus entidades dependientes.<sup>52/</sup> Adicionalmente, en este mismo contexto, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se hace referencia a la creación por parte del Consejo de la Magistratura, de la Dirección Nacional de Transparencia y Lucha contra la

---

49. *Ibidem*, p. 18, *supra* nota 4.

50. *Ibidem*, p. 19, *supra* nota 4.

51. De conformidad con el D.S. No. 29894, las unidades de transparencia son un órgano técnico operativo de cada ministerio, con potestad para ejecutar las acciones tendientes a transparentar la gestión pública del ministerio, teniendo un nivel de coordinación con el MTILCC, cuyas funciones son a) asegurar el acceso a la información pública del respectivo ministerio; b) promover la ética de los servidores públicos del respectivo ministerio; c) desarrollar mecanismos para la implementación del control social; y d) velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros.

52. Véase presentación del Órgano Judicial con ocasión de la visita *in situ*, disponible en:

[www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_TSJ.ppt#402,5,areas estratégicas](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_TSJ.ppt#402,5,areas%20estrategicas)

Corrupción<sup>53/</sup>, para la definición de tareas orientadas a la participación, el control social y la consolidación de la rendición pública de cuentas.

[125] En materia de capacitación, durante la visita *in situ*, el Órgano Judicial señaló la realización de talleres para difundir y dar a conocer la Ley No. 004. Asimismo, se informó, que se ha provisto capacitación transversal en materia de lucha contra la corrupción en todas las áreas y temáticas; se ha incorporado un módulo de ética al Curso Inicial para la Formación de Jueces y se está trabajando también en la formación de jueces especialistas en la lucha contra la corrupción.<sup>54/</sup>

[126] Respecto a la manera de suministrar información a los ciudadanos, el Órgano Judicial cuenta con su página en Internet en [www.organojudicial.gob.bo](http://www.organojudicial.gob.bo). Esta página a su vez contiene, entre otros, enlaces a los portales del TSJ (<http://suprema.poderjudicial.gob.bo>) y del Consejo de la Magistratura ([www.organojudicial.gob.bo/Consejo/start.aspx](http://www.organojudicial.gob.bo/Consejo/start.aspx)). El primero, contiene información institucional; normas, leyes y jurisprudencia, así como enlaces mediante los cuales se pueden presentar sugerencias, quejas y denuncias ante el TSJ. El segundo, contiene información institucional en cuanto al Consejo y enlaces para presentar también sugerencias, quejas y denuncias; enlaces para someter la declaración jurada de bienes en línea; informes de auditorías internas; convocatorias para contrataciones de personal, bienes y servicios; y un enlace a la versión electrónica de la Revista Institucional del Órgano Judicial, sobre la cual, durante la visita *in situ*, se entregaron ejemplares impresos.

[127] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes del Órgano Judicial dieron información acerca de la difusión que se hace de sus áreas estratégicas, a través de la diseminación de reglamentos y boletines que se hacen del conocimiento de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, y también a través de la participación de esas organizaciones en la rendición pública de cuentas. Asimismo, durante la visita, se entregaron algunos ejemplos impresos de los boletines institucionales que publica el TSJ.

[128] En cuanto a la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, los representantes del Órgano Judicial, durante la visita *in situ*, señalaron que este Órgano del Estado también hace parte del sistema de rendición pública de cuentas y destacaron que se está aumentando de uno a dos el número de rendiciones realizadas anualmente en cada una de las dependencias del TSJ.<sup>55/</sup> Durante la visita *in situ*, de igual forma facilitaron algunos ejemplares de los informes de gestión judicial de 2010 y 2011 elaborados por el TSJ, así como los informes de rendición pública de cuentas del Consejo de Magistratura correspondientes también a 2010 y 2011. Asimismo, cabe informar que el 29 de junio de 2012 se realizó en el Consejo de la Magistratura la rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones durante el primer semestre de su gestión, evento que se encuentra publicado en su página Web y en otros instrumentos de difusión. A este respecto, cabe aclarar, que lo sustancial de las decisiones individuales adoptadas por los jueces no están sujetos a rendición pública de cuentas, sino sólo a apelación judicial.<sup>56/</sup>

[129] Los representantes del Órgano Judicial explicaron también que está por concluir el periodo de transición en vista de la nueva CPE y la Ley No. 025 principalmente, destacando, como parte de esta

---

53. Véase: [www.organojudicial.gob.bo/Consejo/Transparencia.aspx](http://www.organojudicial.gob.bo/Consejo/Transparencia.aspx)

54. Véase presentación del Órgano Judicial con ocasión de la visita *in situ*, *supra* nota 44.

55. Véase presentación del Órgano Judicial con ocasión de la visita *in situ*, *supra* nota 44.

56. Esta información fue puesta de presente por el Estado analizado en el marco de la reunión del Subgrupo de Análisis. Véase *supra* nota 28.

transición, la creación del Consejo de la Magistratura, antes Consejo de la Judicatura, y del TSJ, antes Corte Suprema de Justicia.

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[130] El Órgano Judicial cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[131] En primer lugar, el Comité observa que la Ley No. 004 requiere la creación de tribunales y juzgados anticorrupción, y la designación, por parte del Consejo de la Magistratura, de los jueces necesarios para conocer y resolver los procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados. En este contexto, cabe señalar que durante la visita *in situ* el TSJ manifestó que en marzo de 2012 solicitó al Consejo de la Magistratura la convocatoria pública de concurso de mérito para la designación de los jueces anticorrupción requeridos por la Ley No. 004.

[132] En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes del Consejo de la Magistratura explicaron los impedimentos para el establecimiento de los tribunales y juzgados anticorrupción y la designación de los correspondientes jueces. Con respecto a la designación, argumentaron que no es posible publicar la convocatoria respectiva hasta en tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional no promulgue el procedimiento para la selección de estos jueces. Con respecto a la creación de los tribunales y juzgados anticorrupción, manifestaron que el principal problema es de recursos financieros, señalando que se requiere la creación de más de 150 juzgados anticorrupción, y que hasta el momento, no se han incluido en el presupuesto del Órgano Judicial los fondos necesarios para ello. El Comité formulará recomendaciones tomando en cuenta lo anterior (véanse recomendaciones 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 en el capítulo II de este informe).

[133] En segundo lugar, con respecto al sistema IANUS, el cual sirve para el registro, monitoreo y seguimiento de procesos judiciales, durante la visita *in situ*, se informó que no todos los jueces, tribunales y juzgados están haciendo uso del mismo. Al respecto, el Comité considera que una mayor utilización de este Sistema contribuiría a una mayor eficiencia con respecto al monitoreo y seguimiento de los procesos y, por lo tanto, esto redundaría en una mayor eficacia en cuanto a las funciones del Órgano Judicial relativas a sancionar a quienes comentan actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 3.4.4 en el capítulo II de este informe).

[134] En tercer lugar, durante la visita *in situ*, los representantes del Órgano Judicial pusieron de presente la preocupación de los jueces por carecer de información que les permita conocer oportunamente si la persona que están juzgando es un reincidente. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta esta situación. (Ver recomendación 3.4.5 del capítulo II de este informe).

### 3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[135] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y en el marco de la visita *in situ*, se recabó información relativa a los resultados que ha obtenido el Órgano Judicial en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:<sup>57/</sup>

[136] En primer lugar, de acuerdo con la respuesta del Estado analizado al cuestionario, “[e]n las gestiones 2003, 2004 y 2005 existían un total de 8772 causas acumuladas, y hasta el 22 de diciembre de 2010 se resolvieron un total de 3054 causas de acuerdo al siguiente detalle: Sala Plena 197 causas; Sala Social y administrativa primera 690 causas, Sala Social y administrativa segunda 595 causas, Sala Civil 439 causas, Sala Penal Primera 701 causas, Sala Penal Segunda 433 causas.”<sup>58/</sup> Con respecto a 2011, la respuesta indica que fueron resueltas 2,236 causas por las diversas salas del TSJ.

[137] El Comité observa, en cuanto a las cifras antes citadas, que las mismas no permiten una determinación de los resultados del trámite de casos relacionados con la función del Órgano Judicial relativa a la sanción de los actos de corrupción que generen responsabilidad civil o penal. Por lo tanto, tampoco permiten una determinación del número de casos relacionados con la corrupción que han resultado en: imputación de responsabilidad o sanción; la no imputación de responsabilidad o absolución; la prescripción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. El Comité formulará una recomendación en vista de lo anterior (véase recomendación 3.4.6 en el capítulo II de este informe).

[138] En segundo lugar, la respuesta del Estado analizado al cuestionario también incluye un cuadro, que muestra un total de 7,609 causas pendientes de resolución hasta el 31 de diciembre de 2010, mientras que ingresaron 2,786 causas desde el 1 de enero de 2011 hasta el 20 de diciembre de 2011. El mismo cuadro denota que se emitieron 2,206 autos supremos entre enero y diciembre de 2011, quedando para resolver 8,880 causas a partir del 1 de enero de 2012.

[139] Con respecto a las cifras anteriores, el Comité observa que el número de causas de corrupción pendientes de resolución al cierre de 2011 (8,880 causas) ha incrementado significativamente comparado con el número de causas pendientes a fines de 2010 (7,609 causas), de manera que parecería estar incrementando la mora judicial en vez de lo contrario. En este contexto, en el marco de las reuniones sostenidas con los representantes del Ministerio Público con ocasión de la visita *in situ*, los mismos manifestaron que, en su opinión, existen graves problemas en cuanto al sistema judicial actual en el Estado analizado. Por último, los representantes del Consejo de la Magistratura durante la visita *in situ* opinaron que varios son los factores que están contribuyendo a la falta de procedimientos judiciales ágiles, lo cual afecta negativamente el sistema judicial. Entre estos factores, destacaron que en algunos juzgados se tramitan entre 1,000 y 2,000 causas por año.

[140] En seguimiento de lo anterior, el Comité toma nota de lo expresado por los representantes del TSJ durante la visita *in situ*, en el sentido de que se ha priorizado la asignación de casos de corrupción. Sin embargo, el Comité toma nota también que el Órgano Judicial manifestó que hay un déficit en cuanto al número de juzgados necesarios, y que en las ciudades más pobladas, hay una sobrecarga de causas en los juzgados. Al mismo tiempo, los representantes del TSJ citaron a manera de ejemplo, el caso de un juzgado en un área de baja población que sólo tramitó un caso en todo el

---

57. Información adicional sobre resultados fue presentada por el Estado analizado en la respuesta al cuestionario, y con ocasión de la visita *in situ*. Esta información puede ser consultada en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

58. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 35, *supra* nota 4.

año. En vista de lo anterior, el Comité considera útil que el Estado analizado adopte las medidas que estime necesarias para asegurar una eficiente distribución de juzgados y jueces existentes en su territorio, tomando en cuenta el presupuesto limitado que existe para tal efecto. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 3.4.7 en el capítulo II de este informe).

[141] En tercer lugar, el Comité destaca lo dicho por el MTILCC durante la visita *in situ*, en el sentido de que la demora en el establecimiento de juzgados y tribunales anticorrupción previstos por la Ley No. 004, están provocando una cierta retardación en la administración de justicia. En este sentido, el Comité considera que la designación de los jueces anticorrupción, y la creación y plena operación de los tribunales y juzgados anticorrupción previstos en la Ley No. 004, es de fundamental importancia para el Estado analizado. El Comité formulará una recomendación en este sentido (véase recomendación 3.4.8 en el capítulo II de este informe).

[142] En cuarto lugar, el Comité observa que las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público, sobre los casos tramitados durante la gestión 2005-2009, indican que de los 5,186 casos de corrupción tramitados, 1,626 han concluido.<sup>59/</sup> De los casos concluidos, apenas 29 casos, aproximadamente el 1.8%, han resultado en una sentencia, mientras que 1,024, aproximadamente el 65%, han concluido por rechazo. Con base en lo anterior, el Comité denota la existencia de un posible problema de efectividad en cuanto al procesamiento de casos de corrupción y formulará una recomendación al respecto (véase recomendación 3.4.9 en el capítulo II de este informe).

### **3.4. Conclusiones y recomendaciones**

[143] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Órgano Judicial en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[144] El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Órgano Judicial como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

[145] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Adoptar las disposiciones y medidas necesarias que reglamenten las convocatorias y los procedimientos de selección y designación de los jueces anticorrupción a que se refiere la Ley No. 004. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Dotar al Órgano Judicial con los recursos financieros necesarios para la creación de los Tribunales y Juzgados Anticorrupción previstos en la Ley No. 004, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Dotar al Consejo de la Magistratura con los recursos financieros necesarios para que pueda designar en cada departamento del Estado el número de jueces anticorrupción necesarios de acuerdo con la Ley No. 004. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).

---

59. Véase párrafos 97 a 99 en la sección 2.3 del presente Informe.



- 3.4.4. Promover la efectiva utilización del sistema informático IANUS para el seguimiento y procesamiento de casos en todos los tribunales y juzgados del Órgano Judicial. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Adoptar disposiciones o medidas que establezcan un sistema o mecanismo que permita a los jueces tener acceso a información de reincidencia, con el fin de que la misma se tome en cuenta al momento de dictar sentencia. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Mantener resultados sobre la sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal o civil, que permita determinar el número de casos que han resultado en imputación de responsabilidad o sanción; la no imputación de responsabilidad o absolución y en la prescripción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Adoptar las medidas necesarias que aseguren la distribución eficiente y efectiva de los juzgados y tribunales existentes del Órgano Judicial, tomando en cuenta el presupuesto limitado que existe para este efecto. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Crear los tribunales y juzgados anticorrupción y designar los jueces anticorrupción, a la brevedad posible, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley No. 004. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Realizar un estudio para determinar las razones del bajo porcentaje de casos de corrupción concluidos por sentencia; y con base en los resultados de este estudio, implementar las medidas correctivas que se consideren apropiados. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

#### **4. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

##### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[146] La Procuraduría General del Estado (PGE) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[147] En cuanto a sus objetivos y funciones, el artículo 229 constitucional establece que la PGE es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El artículo 231 constitucional, por su parte, señala como funciones de la PGE, entre otras, la de requerir a los servidores públicos y a las personas particulares la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones (numeral 4); solicitar el enjuiciamiento de los servidores públicos que por negligencia o corrupción ocasionen daños al patrimonio del Estado (numeral 5); instar a la Fiscalía General del Estado a ejercer las acciones judiciales por los delitos cometidos contra el patrimonio público (numeral 7), y presentar proyectos de ley sobre materias de su competencia (numeral 8).

[148] En cuanto a su estructura, el artículo 9° de la Ley No. 064<sup>60/</sup> de la Procuraduría General del Estado (Ley No. 064), dispone que la misma está integrada por tres Subprocuradurías: 1) la Subprocuraduría de Defensa y Representación del Estado, 2) la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de la Unidades Jurídicas de la Administración Pública, y 3) la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa.

[149] Asimismo, el artículo 17 del D.S. No. 0788 dispone que la PGE contará con una estructura de apoyo integrada por una Dirección General de Asuntos Administrativos, una Dirección General de Asuntos Jurídicos, una Dirección General de Planificación, una Unidad de Auditoría Interna, una Unidad de Transparencia y otras direcciones o unidades a ser creadas, sobre las cuales, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes de la PGE explicaron que aunque el plan es crear 9 de éstas, hasta la fecha de la visita, sólo se han creado 4.

[150] La PGE cuenta también con dos instituciones, la Escuela de Abogados del Estado que apoyará en la formación y capacitación de juristas del Estado y el Consejo de Abogados del Estado, cuya función principal es producir doctrina jurídica en materia de defensa legal del Estado. Ambas instituciones se encuentran en pleno funcionamiento.

[151] Respecto del control interno, el D.S. No. 0788, en su artículo 21, prevé que la Unidad de Auditoría Interna de la PGE es la responsable de desarrollar las tareas y actividades propias determinadas por las normas de Administración y Control Gubernamentales. Por su parte, el artículo 22 del mismo D.S. No. 0788 responsabiliza a la Unidad de Transparencia de la PGE, entre otros aspectos, a asegurar el acceso a la información pública, promover la ética de los servidores públicos y desarrollar mecanismos para la implementación del control social.

[152] Con relación a la coordinación con otros órganos del Estado y la obtención del apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, el artículo 8 de la Ley No. 064, prevé, entre otras funciones de la PGE, la de coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia para determinados fines. Cabe señalar, asimismo, que la PGE integra también el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas creado por la Ley No. 004.

[153] Sobre la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, el artículo 230 constitucional dispone que la PGE será dirigida por un Procurador General (numeral I), cuya designación, una vez cumplidos los requisitos exigidos para la Magistratura del TSJ, corresponde al Presidente del Estado (numeral II). Por su parte, el artículo 12 de la Ley No. 064 señala los requisitos específicos para ser Procurador General.

[154] En cuanto a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, el artículo 29 de la Ley No. 064 dispone que la designación del personal administrativo de la PGE corresponde al Procurador General “...de conformidad a lo establecido en las normas básicas de administración de personal y leyes vigentes. Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la PGE puso de presente la existencia del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la PGE (Reglamento Específico).

---

60. Véase el artículo 9 de la Ley No. 064, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_sp.htm)

[155] El artículo 14 del Reglamento Específico establece las pautas para el reclutamiento del personal de la PGE, incluyendo las figuras de invitación directa, convocatoria externa, o convocatoria interna, según la categoría y nivel de la vacante a llenar. El mismo artículo establece también las pautas para la selección de personal, basada en una evaluación curricular, de capacidad técnica y de cualidades personales.

[156] Por su parte, el artículo 10 del Reglamento Específico intitulado “Proceso de Cuantificación de la Demanda de Personal”, requiere una determinación de la cantidad y denominación de puestos necesarios en la PGE para la elaboración del Plan Anual de Personal, entre otros aspectos.

[157] En lo referente a la manera de suministrar información a los ciudadanos sobre sus funciones y responsabilidades, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes de la PGE entregaron una copia impresa del Informe de Gestión 2011, la cual contiene información básica sobre la PGE, informes de actividades de sus distintas Subprocuradurías, de la Escuela de Abogados, así como de las Direcciones, incluyendo también información sobre las acciones de fortalecimiento institucional emprendidas durante ese mismo año (2011). Asimismo, la PGE cuenta con su portal en Internet, disponible en [www.procuraduria.gob.bo](http://www.procuraduria.gob.bo), el cual contiene información relacionada con su marco legal y resoluciones emitidas, un formulario electrónico de quejas y denuncias y datos sobre los programas y diplomados ofrecidos por la Escuela de Abogados, entre otros.

[158] En cuanto a la existencia de manuales o guías relativas a las tareas que desarrolla la PGE y de acciones de fortalecimiento institucional, el mismo Informe de Gestión 2011 facilitado durante la visita *in situ*, refleja la elaboración y aprobación del Manual de Organización y Funciones de la PGE; los Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración de Personal; de Programación de Operaciones; y de Organización Administrativa; así como el Reglamento General de la Escuela de Abogados del Estado y los Reglamentos Internos de Personal (Resolución No. 064/2011); de Docentes de la Escuela de Abogados del Estado; de Cursantes de la Escuela de Abogados del Estado; y de Graduación y Titulación de la Escuela de Abogados del Estado.

[159] El mismo Informe de Gestión 2011 pone de presente también la creación al interior de la PGE de los siguientes sistemas tecnológicos: 1) Sistema de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública (SESFUJAP); 2) Sistema de Investigación y Producción Normativa (SIASPRON), el cual está aún en proceso de implementación y servirá, entre otros aspectos, para el seguimiento de los trámites de análisis y evolución de la legalidad de los contratos nacionales y extranjeros de las entidades de la Administración Pública; y 3) el Sistema de Información de Correspondencia (SISCO), cuyo objetivo es brindar un entorno ágil y sencillo para catalogar, almacenar y acceder a la correspondencia institucional.

[160] Con respecto a la capacitación impartida por la PGE, del Informe de Gestión 2011 se desprende que durante ese año se llevaron a cabo 11 talleres de socialización y actualización para difundir las funciones y atribuciones de la PGE, incluyendo talleres dirigidos a municipios, estudiantes, abogados y ciudadanos en general.

[161] En cuanto a la rendición de cuentas, el multicitado Informe de Gestión pone de presente también que en diciembre de 2011, la PGE llevó a cabo su rendición pública de cuentas ante la sociedad civil, sobre las responsabilidades económicas, políticas y administrativas de la institución, así como los resultados y ejecución presupuestaria.

[162] Respecto del presupuesto de la PGE, de acuerdo con el capítulo II de la Ley No. 064, éste estará contemplado en el Presupuesto Nacional, y su elaboración, administración y ejecución serán responsabilidad del Procurador General.

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[163] La PGE cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[164] En primer lugar, el Comité, sin perjuicio de la relativa reciente creación de la PGE, la cual a la fecha de la visita *in situ* al Estado analizado contaba apenas con un año de funcionamiento, denota, con base en la información provista durante la visita *in situ* y la disponible en el portal en Internet de la PGE, que únicamente están operando 5 de las 9 Direcciones Departamentales de la PGE que se requieren para su pleno funcionamiento en todo el país. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 4.4.1 en el capítulo II de este informe).

[165] En segundo lugar, el Comité denota que si bien en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se pone de presente que la PGE ha realizado actividades de concientización y capacitación a la ciudadanía, particularmente en cuanto sus funciones y “socialización” de leyes, observa también que ni en la misma respuesta ni en las reuniones sostenidas con ocasión de la visita *in situ*, revelaron la impartición de capacitación a los funcionarios de la PGE en relación con sus responsabilidades en materia de prevención de la corrupción. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 4.4.2 en el capítulo II de este informe).

#### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[166] La respuesta al cuestionario del Estado analizado no proporciona resultados en cuanto al desarrollo de las funciones y responsabilidades de la PGE relacionadas con la prevención de actos de corrupción. Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de esta institución explicaron que esta situación responde a que la PGE entró en operaciones recién en enero de 2011.

[167] No obstante y sin perjuicio de su reciente creación, el Comité formulará una recomendación en el sentido de que la PGE cuente con estadísticas y/o lleve a cabo otras medidas que le permitan informar respecto de los resultados del desarrollo de sus funciones, incluyendo aquellas que demuestren, entre otros aspectos: el número de servidores públicos o personas particulares a los cuales se les ha requerido información de acuerdo con el numeral 4 del artículo 231 constitucional; el número de esos requerimientos cumplidos y las acciones tomadas en los casos de incumplimiento; el número de veces que la PGE ha requerido el enjuiciamiento de servidores públicos por actos de corrupción o negligencia de acuerdo al numeral 5 del artículo 231 constitucional y las acciones tomadas por parte del Ministerio Público con base en esos requerimientos y la manera en que concluyeron esos casos; y el número de ocasiones que la PGE ha solicitado la realización de actividades de inteligencia financiera y/o patrimonial, por parte de la Unidad de Investigación Financiera, en ejercicio de la función descrita en el artículo 18 de la Ley No. 004,<sup>61/</sup> y el resultado de esas solicitudes (véase recomendación 4.4.3 en el capítulo II de este informe).

---

61. Véase párrafo 180 en la sección 5.1 del presente Informe.

[168] Finalmente, en cuanto a la función relativa a la presentación de proyectos de ley de acuerdo con el numeral 8 del artículo 231 constitucional, los representantes de la PGE manifestaron durante la vista *in situ* que, aunque han contribuido en la elaboración de algunos proyectos de ley, entre los cuales se ubica el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la PGE no ha tenido la oportunidad de hacerlo respecto de legislación en materia de corrupción. En este sentido, el Comité observa que esta es también una atribución del MTILCC, por lo que la cooperación y coordinación entre ambas instituciones al respecto sería altamente beneficiosa. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración lo anterior (véase recomendación 4.4.4 en el capítulo II de este informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones**

[169] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la PGE en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[170] El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear y fortalecer a la PGE como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.

[171] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Establecer, en la medida de lo posible, las 4 Direcciones Departamentales restantes de la PGE encargadas de ejercer sus funciones y atribuciones en los Departamentos correspondientes. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Promover actividades de capacitación para los funcionarios de la PGE, particularmente en cuanto a sus funciones relacionadas con la prevención de los actos de corrupción. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Promover las medidas que permitan a la PGE evaluar e informar sobre los resultados en el cumplimiento de sus funciones, tales como el mantenimiento de estadísticas y/u otro tipo de información sobre el número de servidores públicos o personas particulares a los cuales se les ha requerido información de acuerdo con el numeral 4 del artículo 231 constitucional; el número de esos requerimientos cumplidos y las acciones tomadas en los casos de incumplimiento; el número de veces que la PGE ha requerido el enjuiciamiento de servidores públicos por actos de corrupción o negligencia de acuerdo al numeral 5 del artículo 231 constitucional y las acciones tomadas por parte del Ministerio Público con base en esos requerimientos y la manera en que concluyeron esos casos; y el número de ocasiones que la PGE ha solicitado la realización de actividades de inteligencia financiera y/o patrimonial, por parte de la Unidad de Investigación Financiera, en ejercicio de la función descrita en el artículo 18 de la Ley No. 004 y el resultado de esas solicitudes. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe)
- 4.4.4. Contribuir, en coordinación con el MTILCC y demás instituciones competentes, en la elaboración de proyectos de ley en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tales como los relacionados con el acceso a la información y el control social. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).

## 5. UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

### 5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[172] La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[173] En relación con las funciones de la UIF, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que “...es una entidad especializada en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos precedentes, a través del análisis financiero patrimonial, la emisión de políticas y normas, así como la permanente fiscalización de su cumplimiento. Ésta aplica los mejores estándares y las mejores prácticas, apoyada en las competencias de su capital humano, liderizando la lucha contra la Legitimación de Ganancias ilícitas y delitos precedentes, aportando en la erradicación de la Corrupción...”<sup>62/</sup>

[174] Asimismo, de acuerdo con el artículo 2º de su Reglamento, contenido en el D.S. No. 24771, la UIF forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o ASFI).<sup>63/</sup> El mismo artículo dispone que la UIF goza de autonomía funcional, administrativa y operativa y que es la entidad encargada de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.

[175] El artículo 18 del Reglamento describe las atribuciones de la UIF, incluyendo, entre otras, la de emitir instrucciones o recomendaciones a los sujetos obligados (numeral 2), recibir y pedir los reportes de actividades sospechosas de los sujetos obligados (numeral 3), solicitar cooperación técnica de cualquier organismo público (numeral 4), recabar información pública o confidencial de cualquier organismos de registro público, el cual está obligado a colaborar (numeral 5), acceder a cualquier documentación de entidades públicas (numeral 6), remitir a las autoridades competentes elementos fundamentados para la investigación y persecución penal, cuando determine la existencia de una operación sospechosa (numeral 8), solicitar la realización de auditorías externas a los sujetos obligados (numeral 9), organizar programas de capacitación en prevención de legitimación de ganancias ilícitas (numeral 11) y presentar un informe anual al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras (numeral 13).<sup>64/</sup>

[176] Con ocasión de la visita *in situ*, los representantes de la UIF pusieron de presente que en desarrollo de la función plasmada en el numeral 2 del artículo 18 de su Reglamento señalado en el párrafo anterior, la UIF, a través de la Resolución No. 001/08 “Instrucción para la Elaboración de listas PEPs”, y en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el sentido de que se requiere una vigilancia más exhaustiva sobre las operaciones comerciales de las denominadas personas expuestas políticamente (PEP), instruyó a los sujetos obligados la elaboración de listas PEP. En este sentido, la UIF ha emitido las siguientes resoluciones relacionadas con la elaboración de las listas PEP: Circular No. 178/2010 “Instructivo para envío de listas PEPs”; y la Resolución No. 001/2010 “Instrucción para la elaboración de listas PEPs extranjeras”.

---

62. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 3, *supra* nota 4.

63. El D.S. No. 29894, dispone en su artículo 137, que “... la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia y asumirá además las funciones y atribuciones de control y supervisión de las actividades económicas de valores y seguros...”

64. Actualmente ASFI, *ibidem*.

[177] Asimismo, se puso de presente durante la visita *in situ* que la UIF, de acuerdo con el artículo 19 de su Reglamento, deberá oponerse por 48 horas a la ejecución de una operación cuando se determine de que se trata de una operación sospechosa.

[178] Por su parte, la Ley No. 004, en su artículo 18, dispone que, además de las establecidas por Ley, la UIF tendrá también como atribuciones analizar y realizar actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción de oficio o a requerimiento escrito del MTILCC, la PGE y/o de los fiscales anticorrupción (numeral 1), y remitir los resultados del análisis y antecedentes al MTILCC, PGE, Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda (numeral 2).

[179] Con respecto al ámbito de sus funciones, la respuesta del Estado analizado al cuestionario explica que *“[e]l ámbito en el que la UIF desarrolla sus funciones es esencialmente financiero, puesto que la información que debe ser procesada está relacionada con información generada por el sistema financiero en general, es decir, información relacionada con operaciones activas, pasivas, contingentes y de orden de Entidades de Intermediación Financiera, información bursátil y de seguros. Adicionalmente se cuenta con información que permite analizar la evolución patrimonial.”*<sup>65/</sup>

[180] En cuanto a la adopción de decisiones y los recursos de revisión que existen con respecto a las mismas, durante la visita *in situ*, los representantes de la UIF explicaron que si una investigación revela indicios de un delito, se remite un dictamen fundamentado al Ministerio Público para su adecuada tramitación. El artículo 40 del Reglamento de la UIF prevé que para ser válido, el dictamen tiene que tener la firma de tres miembros del equipo especializado. Además, los representantes de la UIF explicaron que como las decisiones tomadas son de naturaleza netamente técnica, no corresponde un proceso de revisión interno ni externo en contra de esa decisión.

[181] El artículo 5º del Reglamento dispone que el Director de la UIF es su máxima autoridad, quien, de acuerdo con el artículo 6º, será designado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de una terna que le presente un comité de calificación y selección conformado por un representante de la mismas Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, un representante de la Superintendencia de Valores y un representante de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Los artículos 8º, 9º y 10 del mismo Reglamento prevén los requisitos, incompatibilidades y prohibiciones, respectivamente, para ser Director del UIF.

[182] Con respecto al comité de calificación antes referido, la respuesta del Estado analizado al cuestionario señala que adicionalmente al cambio de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros es ahora la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), y la supervisión del Mercado de Valores es responsabilidad de la ASFI. En este sentido, la respuesta explica que *“[e]s de suponer que actualmente, los representantes para el nombramiento de la MAE [Máxima Autoridad Ejecutiva] de la UIF estaría compuesto por uno de la ASFI y uno de la APS”*<sup>66/</sup>, por lo que es la ASFI quien designa actualmente al Director de la UIF de la terna presentada.

[183] El artículo 7º dispone que el Director durará en su cargo 5 años y que podrá ser reelegido una sola vez, mientras que el artículo 12 dispone que el Director puede ser destituido por la comisión de una falta grave, de un delito doloso que tenga como consecuencia la privación de la libertad, o un

---

65. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 1, *supra* nota 4.

66. Ibidem, p. 14, *supra* nota 4.

delito contra la función pública. Asimismo, el artículo 13 dispone que el Director podrá ser suspendido de acuerdo a lo establecido en la Ley SAFCO.

[184] Con respecto al personal de la UIF, el artículo 15 de su Reglamento dispone que el equipo técnico especializado de la UIF estará compuesto por auditores, abogados, contadores, profesionales, en informática y otros, que cumplan con los requisitos de idoneidad y experiencia en el área de su competencia. El artículo 16 dispone que los mismos serán designados por el Director de la UIF previa convocatoria pública.

[185] Es importante señalar que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se aclara que la UIF al ser parte de la ASFI y pertenecer por ello al sector público, se sujeta a las disposiciones de la Ley SAFCO.<sup>67/</sup>

[186] En cuanto a los documentos que describen las funciones de su personal, la UIF cuenta con un Manual de Funciones del mismo, que de acuerdo con la respuesta del Estado analizado al cuestionario, describe principalmente los cargos.<sup>68/</sup>

[187] Con respecto a la capacitación impartida, la respuesta del Estado analizado al cuestionario también menciona que se efectúan capacitaciones y actualizaciones constantes al personal, y que cada funcionario debe cumplir con 40 horas de capacitación anual como mínimo.<sup>69/</sup>

[188] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas de la UIF, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se pone de presente que se han elaborado y actualizado manuales e instructivos para ordenar y aplicar en el sistema financiero nacional las pautas de intercambio de información, incluyendo el Manual de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y los Instructivos Específicos para Entidades de Intermediación Financiera, para Entidades de Valores y para Entidades de Seguros. Asimismo, durante la visita *in situ*, la UIF explicó sobre la lista de personas políticamente expuestas (PEPs).

[189] Con respecto al fortalecimiento institucional de la UIF y la implementación de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, se han implementado los siguientes tres sistemas informáticos:<sup>70/</sup> el Portal de Intercambio Electrónico de Datos (PIED), a través del cual es posible contar con un servicio en línea con las entidades financieras realizando solicitudes de información con mayor rapidez y recibiendo reportes de operaciones sospechosas; el Sistema de Administración de Información de Investigación Financiera (SAIIF), que permite administrar la información requerida de las entidades financieras, procesarla, y elaborar informes preliminares; y el Sistema de Administración de Documentación LOTUS notes, que permite una correcta y ordenada administración de documentación que ingresan y salen y darles el seguimiento respectivo.

[190] Respecto de la manera de suministrar información a los ciudadanos, la respuesta del Estado analizado al cuestionario explica que “[p]or las características referentes a las funciones de la UIF y a las normas de confidencialidad sobre las que se rige, no es posible dar a conocer a la opinión pública información sobre los procesos de investigación. Una vez que se ha determinado en alguno

---

67. Véase también los párrafos 19 a 22 en el capítulo 1.1 del presente informe, en cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos.

68. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 17, *supra* nota 4.

69. *Ibidem*.

70. *Ibidem*, p. 19, *supra* nota 4.



*de ellos operaciones sospechosas con indicios de legitimación de ganancias ilícitas es puesto en conocimiento de las autoridades competentes.”<sup>71/</sup>*

[191] La UIF también cuenta con su página en Internet, disponible en <http://uif.asfi.gob.bo>, la cual contiene, entre otras, información general sobre la institución, normativa relacionada con la misma, incluyendo resoluciones emitidas por ella, estadísticas sobre casos de investigación financiera, y un listado actualizado de los sujetos/entidades obligadas, que cuentan con una licencia de funcionamiento por haber cumplido con los requisitos establecidos por ley.

[192] En cuanto al control interno, la respuesta del Estado analizado al cuestionario describe que aunque la ASFI cuenta con un Servicio de Atención de Reclamos del Cliente (SARC), “...la UIF no cuenta con este tipo de servicio puesto que las funciones que realiza no se encuentra[n] relacionada[s] directamente con un servicio a personas naturales”<sup>72/</sup>, pero sí cuenta con un departamento de auditoría interna.

[193] De acuerdo con el artículo 17 de su Reglamento, el financiamiento de la UIF proviene de las asignaciones anuales del Tesoro General de la Nación, las asignaciones nacionales de Superintendencias sectoriales, la participación en un 30% de los ingresos provenientes de los bienes decomisados en casos de legitimación de ganancias ilícitas, y de asistencia económica y técnica de organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

[194] En este contexto, la respuesta del Estado analizado al cuestionario señala “[r]especto a las asignaciones del TGN y Superintendencias sectoriales...la Unidad de Investigaciones Financieras percibe recursos a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a la cual anualmente presenta un presupuesto por la gestión, mismo que es aprobado por esta entidad y el Ministerio de Economía y Finanzas para su posterior ejecución.”<sup>73/</sup>

[195] En relación con mecanismos de coordinación, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley No. 004, la UIF también forma parte del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, el cual se reúne por lo menos cuatro veces al año. Asimismo, la respuesta del Estado analizado al cuestionario pone de presente que la UIF ha establecido mecanismos de coordinación con las Entidades Financieras para la obtención de información para el análisis financiero.<sup>74/</sup>

[196] Por su parte, el artículo 21 de la Ley No. 004 prevé un listado de diferentes categorías de entidades y sujetos obligados a proveer información solicitada por la UIF, y de informar a la misma cuando detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción.

[197] Con respecto a la rendición de cuentas, la respuesta del Estado analizado al cuestionario pone de presente que la UIF forma parte de la ASFI y que esa entidad es la encargada de efectuar la rendición pública de cuentas. Asimismo, la respuesta manifiesta que anualmente la UIF presenta a la ASFI los resultados alcanzados durante cada gestión.

---

71. *Ibidem*, p. 20, *supra* nota 4.

72. *Ibidem*, p. 21, *supra* nota 4.

73. *Ibidem*, p. 23, *supra* nota 4.

74. *Ibidem*, p. 25, *supra* nota 4.

## 5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[198] La UIF cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[199] En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la UIF no participa en el proceso de rendición de cuentas a la cual están obligados las entidades públicas en el Estado analizado. En este sentido, el Comité toma nota de lo expresado durante la visita *in situ*, en el sentido de que la UIF no toma parte del proceso de rendición pública de cuentas, debido principalmente a la naturaleza confidencial de las funciones que ejerce, y la obligación de reserva en cuanto a la información descrita en el artículo 20 de su Reglamento, por lo que, durante la visita *in situ*, también se explicó que la UIF no prepara informes públicos sobre el desarrollo de sus funciones.

[200] Asimismo, el Comité observa que el numeral 13 del artículo 18 del Reglamento de la UIF, requiere la presentación de un informe anual sobre sus actividades ante la ASFI y, en este sentido, la UIF también explicó durante la visita *in situ*, que por las mismas razones de confidencialidad expuestas, ese informe no contiene datos sobre casos particulares. No obstante lo anterior, el Comité considera que la UIF podría participar, como parte del proceso de rendición pública de cuentas de la ASFI, sin incluir información confidencial o de casos particulares. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 5.4.1 en el capítulo II de este informe).

[201] En segundo lugar, el Comité observa que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario se pone de presente que la UIF cuenta con poco presupuesto para superar las dificultades en lo referente a dar repuestas a las solicitudes que recibe.<sup>75</sup> La misma respuesta también explica con respecto a la ampliación de las atribuciones de la UIF, que “...*el permanente incremento de Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Financiero, solicitudes del Ministerio Público, solicitudes del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y otras, se ve la necesidad de contar con mayor cantidad de personal.*”<sup>76</sup> En este contexto, durante la visita *in situ*, se puso de presente que la UIF cuenta sólo con 35 funcionarios aproximadamente, lo cual no es suficiente para desarrollar adecuadamente la importante labor que realiza. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (véase recomendación 5.4.2 en el capítulo II de este informe).

[202] En tercer lugar, durante la visita *in situ*, los representantes de la UIF identificaron la necesidad de contar con *software* y capacitación especializada de entidades con funciones y naturaleza similares a la UIF como posibles áreas de cooperación técnica. El Comité formulará una recomendación en este sentido (véase recomendación 5.4.3 en el capítulo II de este informe).

## 5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[203] La respuesta del Estado analizado al cuestionario no presenta resultados con respecto a las funciones desarrolladas por la UIF en cuanto a la detección e investigación de prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil. Tampoco, durante la visita *in situ* fueron suministrados datos correspondientes a estos resultados. En este sentido, al igual que ocurre con la rendición pública de cuentas, la UIF explicó que debido a la naturaleza confidencial del trabajo que desempeña, no es posible dar resultados detallados sobre su labor.

---

75. *Ibidem* p. 40, *supra* nota 4.

76. *Ibidem*, pp. 15 y 16, *supra* nota 4.

[204] Sin embargo, la página en Internet de la UIF contiene un enlace a un documento con estadísticas y cuadros que reflejan, entre otros, los siguientes datos:<sup>77/</sup> la UIF ha realizado 561 investigaciones financieras, las cuales han surgido de las siguientes fuentes: 113 de denuncias escritas, 1 por orden judicial, 170 por requerimiento fiscal, 261 de reportes de operaciones sospechosas, y 16 de solicitudes de cooperación internacional. Asimismo, se han investigado 319 casos relacionado con delitos, y que de esos, 157 se tratan de delitos de corrupción.

[205] El Comité observa, con respecto a la información anterior, que la misma no identifica el periodo en el que se realizaron esas 561 investigaciones, ni cuantas se han remitido al Ministerio Público, al MTILCC, a la PGE, o a otra autoridad jurisdiccional, por haberse encontrado indicios de delito, vinculación con la legitimación de ganancias ilícitas o alguna otra infracción. El Comité formulará una recomendación (véase recomendación 5.4.4 en el capítulo II de este informe).

[206] Con relación a lo anterior, durante la visita *in situ*, los representantes de la UIF explicaron que el departamento legal de la institución da seguimiento a los procesos instaurados con base en la información suministrada al Ministerio Público, con respecto a indicios del lavado de dinero. Sin embargo, también manifestaron que no se mantienen datos sobre los procedimientos de esta naturaleza que han resultado en una sanción penal. El Comité formulará una recomendación. (véase recomendación 5.4.5 en el capítulo II de este informe)

#### **5.4. Conclusiones y recomendaciones**

[207] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la UIF en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[208] El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la UIF como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 5 del capítulo II de este informe.

[209] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 5.4.1. Promover la adopción de las medidas necesarias para que la UIF participe, como parte del proceso de rendición pública de cuentas de la ASFI, sin incluir información confidencial o de casos particulares. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.2. Dotar a la UIF con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las referentes a la detección de actos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.3. Buscar la cooperación técnica necesaria de otros estados y agencias de cooperación, cuando corresponda, para que la UIF pueda cumplir sus funciones de manera más eficaz, tomando en cuenta las necesidades puestas de presente e identificadas en la sección 5.2 de este informe. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).

---

77. Disponible en: <http://uif.asfi.gob.bo/LinkClick.aspx?fileticket=PTYWqDScv1A%3d&tabid=65>

- 5.4.4. Fortalecer el mantenimiento de información estadística referida a las actividades de detección e investigación de actos de corrupción, de tal manera que se pueda contar con información sobre el número de investigaciones realizadas por año; y datos que permitan conocer de cuántas investigaciones se ha tomado la decisión de remitirla a otra autoridad competente para el trámite correspondiente, para identificar eventuales problemas y llevar a cabo o recomendar medidas para realizarlas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.5. Fortalecer el mantenimiento de información estadística que permita determinar cuántos procesos penales instituidos ante Ministerio Público con base en información suministrada por la UIF han concluido con una sanción penal, para identificar eventuales problemas y llevar a cabo o recomendar medidas para resolverlos. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).

### III. BUENAS PRÁCTICAS

[210] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

#### [211] En relación con el MTILCC:

[212] “Boletas y pólizas de garantía para contratar con el Estado”. Obligación de toda entidad pública contratante de solicitar a los proponentes la presentación de tales boletas, pólizas o garantías como requisito indispensable para contratar con el Estado, para proteger a este último de cualquier incumplimiento de las condiciones contractuales. Gracias a esta buena práctica, el Estado analizado, a través de la ejecución de estas boletas, ha recuperado más de \$45 millones de dólares estadounidenses entre 2006 y 2011.

[213] “Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas”. La creación, funciones y atribuciones de este Consejo de conformidad con el artículo 6º de la Ley No. 004, como la máxima instancia, ayuda a definir de manera coordinada políticas de Estado en la prevención y lucha contra la corrupción, toda vez que el mismo se integra por las principales instituciones del Estado con responsabilidades en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, siendo: el MTILCC, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la UIF, la PGE y los representantes de la sociedad civil organizada.

[214] “Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha contra la Corrupción (IBEC)”. Además de ser una institución que realiza investigaciones en transparencia, corrupción y ética para la formulación de políticas públicas, ofrece cursos de capacitación y diplomados presenciales y en línea (Internet) en materia anticorrupción tanto para los servidores públicos como para otras personas interesadas.

[215] El Concurso denominado “El Peor Trámite de mi Vida”: Este concurso, ideado, dirigido y coordinado por el MTILCC, permitió “... verificar las innumerables quejas de la población respecto a los servicios públicos que ofrece el Estado Plurinacional de Bolivia en sus diferentes niveles, y el

*procedimiento en los trámites en estos servicios. La percepción de los usuarios participantes en el concurso es que 157 entidades públicas son burocráticas haciendo énfasis en que los servicios públicos no son ágiles, son deficientes y requieren un cambio trascendental e inmediato.”<sup>78/</sup>*

#### **IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>79</sup>**

[216] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por el Estado Plurinacional de Bolivia en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en el informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>80/</sup>, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[217] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### Recomendación:

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Complementar las normas existentes, regulando, cuando corresponda, ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de manera más detallada y específica (la fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

---

78. Véase el formato estándar anexo a la respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, *supra* nota 4.

79 El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe

80. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/blv.htm>

[218] En su respuesta al cuestionario<sup>81/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[219] – La contratación, por parte del MTILCC, de un consultor externo para la elaboración de normativa, incluyendo un anteproyecto de Ley de Nepotismo y Conflicto de Intereses y la socialización de esta normativa en tres Departamentos del país, con servidores públicos de los cuatro Órganos del Estado y representantes de la sociedad civil organizada.

[220] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no se ha adoptado la Ley antes referida.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los individuos, analizar el mejoramiento y fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes restricciones para quienes dejan de desempeñar un cargo público y de las medidas para hacerlas efectivas.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[221] En su respuesta al cuestionario<sup>82/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[222] – La elaboración y socialización del anteproyecto de Ley de Nepotismo y Conflicto de Intereses antes citado.<sup>83</sup>

[223] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, en el sentido de que los conflictos de intereses también pueden referirse a actividades posteriores al servicio público, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no se ha adoptado la Ley antes referida y que no se conoce todavía su posible alcance.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las entidades públicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Códigos de Ética e implanten mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos, entre ellas, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados*

---

81. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 42, *supra* nota 4.

82. *Ibidem*, p. 43, *supra* nota 4.

83. Durante la reunión del Subgrupo de Análisis Preliminar celebrada en la sede de la OEA, en Washington, D.C., el 6 de septiembre de 2012, el Estado analizado puso de presente que el citado anteproyecto de ley incluye referencias a los conflictos de intereses posteriores al desempeño de un cargo público.

*contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[224] En su respuesta al cuestionario<sup>84/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[225] – La Cumbre de Unidades de Transparencia que se llevó a cabo para debatir el tema de la ética pública, la cual contó con la participación de la sociedad civil;

[226] – El “Manifiesto de Descolonización de la Ética Pública y la Revolución de los Servidores y Servidoras Públicos”, que resultó de la Cumbre antes referida y el cual se basa en la filosofía de “servir bien para vivir bien”. Este Manifiesto promueve principios ético-morales ancestrales, y declara una guerra abierta contra la corrupción, siendo la ética pública una filosofía de vida adoptada por los servidores públicos;

[227] – Los *conversatorios* realizados con 795 representantes de organizaciones sociales sobre el contenido del Manifiesto citado”...*para delimitar cual debiera ser el perfil del Nuevo servidor Público*” y con más de 9,000 servidores públicos, para compartir la nueva visión del servidor público;

[228] – La encuesta realizada a más de 15,000 servidores públicos sobre el “clima ético” dentro de sus entidades públicas; y

[229] – La adhesión al proceso de descolonización de la ética pública parte de los servidores públicos y por más de 220 municipios del Estado.

[230] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no se cuenta con los códigos de conducta en todas las entidades públicas que deben tener de acuerdo con la Ley, ni con un plazo para que esas entidades emitan tales códigos. Asimismo, no se han identificado mecanismos para la evaluación de las disposiciones contenidas en los códigos que se han adoptado.

[231] Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de que todas las entidades públicas cuenten con los códigos de conducta previstos por ley y que los mismos cuenten, entre otras, con disposiciones sobre conflictos de intereses, así como el hecho de que el Estado analizado ha manifestado que los códigos de ética no han alcanzado los resultados para los cuales fueron concebidos inicialmente<sup>85/</sup> y por lo tanto se tomó la decisión de aplicar un nuevo enfoque como se expuso en los párrafos 220 a 224 anteriores, el Comité estima del caso reformular la medida c) de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe.

[232] En consecuencia, la medida c) sugerida por el Comité al Estado analizado con respecto a la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, se reformula de la siguiente manera:

---

84. *Ibidem*, p. 44, *supra* nota 4.

85. El Estado analizado, en sus comentarios al proyecto del presente informe, manifestó que: “... *los código de ética que fueron incorporados como una obligatoriedad en la Ley No. 2021... no han servido para una verdadera promoción de valores, principios y normas de conducta de los servidores públicos, por lo que se hace innecesaria dar continuidad a estos elementos...*”

[233] c) Asegurar que todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 (Estatuto del Funcionario Público), adopten a la brevedad sus códigos de ética a que se refiere el artículo 13 de esta Ley y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, e implementen mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos o instrumentos, entre otras, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la prevención de conflictos de intereses.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[234] En su respuesta al cuestionario<sup>86/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[235] – La Emisión del D.S. No. 014, que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la cual establece como una de las medidas a adoptar, entre otras, la promoción de la probidad y ética en los asuntos públicos, consistente en el desarrollo de un Plan de Capacitación en Ética Pública y Probidad a servidores públicos; el desarrollo de estrategias de prevención a través de la educación formal; la premiación de las buenas prácticas en la gestión pública; la identificación de buenas prácticas de gestión pública intercultural; y el desarrollo de un observatorio ciudadano de buenas prácticas.

[236] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no se han adoptado los parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética en cuanto a la prevención de los conflictos de intereses.

[237] No obstante, a la luz del nuevo enfoque que está siendo adoptado por el Estado analizado con respecto a la ética pública, tal como se expone en los párrafos 220 a 224 y 230 anteriores, se reformula en los términos siguientes la medida d) sugerida por el Comité en relación con la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[238] d) Considerar la adopción, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la prevención de conflictos de intereses.

---

86. *Ibidem*, p. 47, *supra* nota 4.



Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, entre ellas, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[239] En su respuesta al cuestionario<sup>87/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[240] – La encuesta realizada a más de 15,000 servidores públicos con preguntas relacionadas con la ética pública, si ésta debería ser o no sancionada, principios y valores que deben ser practicados por los servidores públicos, y compromiso de trabajo, entre otros.

[241] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida e) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no existen lineamientos o guías para orientar a las entidades de la manera contemplada en la medida sugerida.

[242] No obstante, a la luz del nuevo enfoque que está siendo adoptado por el Estado analizado con respecto a la ética pública, tal como se expone en los párrafos 219 a 223 y 229 anteriores, se reformula en los términos siguientes la medida d) sugerida por el Comité en relación con la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[243] e) Considerar la adopción, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, entre ellas, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

## **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

### Recomendación:

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de los recursos de la administración pública.*

---

87. *Ibidem*, p. 47, *supra* nota 4.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las entidades públicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Códigos de Ética e implanten mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos, entre ellas, las relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[244] En su respuesta al cuestionario<sup>88/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[245] – El D.S. No. 181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes, el cual, entre otras, establece las medidas necesarias que deben cumplir los servidores públicos para preservar, custodiar y dar el mejor uso a los bienes y recursos públicos; y

[246] – La tipificación del “uso indebido de bienes y servicios” como figura penal, de acuerdo a la Ley No. 004; y la concientización de más de 550 servidores públicos con respecto a la preservación de los recursos públicos bajo su custodia.

[247] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta, como se señaló anteriormente con respecto a la medida c) de la sección 1.1 de este informe, que todavía no se cuenta con los códigos de conducta en todas las entidades públicas que deberían tener de acuerdo con la Ley, un plazo para que esas entidades emitan tales códigos, ni con mecanismos para la evaluación de las disposiciones contenidas en los códigos que se han adoptado.

[248] Por otra parte, a la luz del nuevo enfoque que está siendo adoptado por el Estado analizado con respecto a la ética pública, tal como se expone en los párrafos 219 a 223 y 229 anteriores, y teniendo en cuenta la importancia de que todas las entidades públicas cuenten con los códigos de conducta previstos por ley y que los mismos cubran la preservación de los recursos públicos, entre otros, el Comité estima del caso reformular la medida a) de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[249] a) Asegurar que todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 – Estatuto del Funcionario Público, adopten a la brevedad sus Códigos de Ética a que se refiere el artículo 13 de esta Ley y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, e implementen mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos y/o instrumentos, entre otras, las relacionadas con la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

---

88. *Ibidem*, p. 48, *supra* nota 4.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la preservación de los recursos públicos.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[250] En su respuesta al cuestionario<sup>89/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[251] – La Resolución Ministerial No. 040/11, que aprueba el Manifiesto Político de Descolonización de la Ética Pública; y

[252] – La guía de ética pública elaborada por el MTILCC que sirve como parámetro de comportamiento para los servidores públicos.

[253] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma. Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de que todas las entidades públicas cuenten con los códigos de conducta previstos por ley y que las mismas cubren la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos, entre otros, y considerando que el Estado analizado ha manifestado que tomará estos aspectos en cuenta en la nueva política de ética a ser elaborada<sup>90/</sup>, a la luz del nuevo enfoque que está adoptando el país analizado con respecto a ética pública, como se señala en los párrafos 219 a 223 y 22 anteriores, se reformula la medida b) sugerida por el Comité al Estado analizado en relación con la recomendación contenida en la sección 1.2 del capítulo IV de este informe:

[254] b) Considerar la adopción, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética que se adopten, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la preservación de los recursos públicos.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, entre ellas, las relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

---

89. *Ibidem*, p. 48, *supra* nota 4.

90. *Ibidem*, p. 48, *supra* nota 4.

[255] En su respuesta al cuestionario<sup>91/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[256] – La guía de ética pública elaborada por el MTILCC, y que sirve como parámetro de comportamiento para los servidores públicos.

[257] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no existen lineamientos o guías para orientar a las entidades de la manera contemplada en la medida recomendada.

[258] No obstante, a la luz del nuevo enfoque que está siendo adoptado por el Estado analizado con respecto a la ética pública, tal como se expone en los párrafos 219 a 223 y 229 anteriores, se reformula en los términos siguientes la medida d) sugerida por el Comité en relación con la recomendación contenida en la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[259] c) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, entre ellas, las relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Bolivia, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

[260] En su respuesta al cuestionario<sup>92/</sup>, el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior medida:

[261] *“Las normas existentes respecto a la responsabilidad de cada servidor público sobre la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, cada entidad a la cabeza de la máxima autoridad, está encargada de velar porque toda esta normativa se cumpla bajo pena de tener que responder administrativamente por el mal manejo del servidor público inferior. A partir de la Ley 004, y la inclusión del tipo penal de uso indebido de bienes y servicios, se ha podido evidenciar en todas las capacitaciones que se dieron a nivel nacional, que todos los servidores públicos, tomaron mayor conciencia de la forma en la que debían manejar los bienes del Estado y el cuidado que debían poner para no hacer que los servidores públicos dependientes realizaran trabajos que no les correspondan. Las capacitaciones sirvieron de evaluación para ver cuán empapados estaban los*

---

91. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

92. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

*servidores públicos sobre la normativa y la concientización sobre la nueva forma en la que debían encarar esta responsabilidad.*<sup>93/</sup>

[262] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la implementación de la medida d) de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, teniendo en cuenta que todavía no se ha reportado de ninguna evaluación de la utilización y efectividad de las normas existentes para la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos.

### **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

#### Recomendación:

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta [el Estado Plurinacional] de Bolivia para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Contemplar dentro de los deberes establecidos en la Ley No. 2027 de 1999 – Estatuto del Funcionario Público, o en los Códigos de Ética que adopten las entidades públicas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de dicha Ley, la obligación de denunciar cualquier infracción de las disposiciones previstas en la misma y en tales Códigos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

[263] En su respuesta al cuestionario<sup>94/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes

[264] La obligación constitucional (artículo 108, numeral 8) de todos bolivianos y bolivianas de denunciar los actos de corrupción.

[265] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) antes transcrita.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Facilitar el cumplimiento de la obligación de denunciar los actos de corrupción, a través de los medios que estime adecuados; y adoptar e implementar medidas de protección para los denunciantes, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

---

93. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

94. *Ibidem*, p. 50, *supra* nota 4.

[266] En su respuesta al cuestionario<sup>95/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[267] – La Ley No. 004, que en su artículo 17, establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos;

[268] – La contratación de un consultor para la elaboración de los lineamientos generales para respaldar el Sistema de Protección; y

[269] – El sistema informático del MTILCC, el cual permite la denuncia con reserva de identidad, por contar con los niveles de seguridad necesarios para impedir que se pueda acceder a los datos del denunciante.

[270] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el sistema todavía no está en operación y faltan las bases y reglamentos del mismo.

[271] Por otra parte, el Comité considera que el Estado analizado ya implementó el aspecto de la medida referente a facilitar la obligación de denunciar los actos de corrupción, a través de la creación del mecanismo de denuncia con reserva de identidad.

[272] En vista de las anteriores consideraciones, el Comité estima del caso reformular la medida b) de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[273] a) Adoptar e implementar las disposiciones y medidas que sean necesarias para poner en funcionamiento el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en el artículo 17 de la Ley No. 004; y asegurar que las disposiciones y medidas que se adopten incluyan, entre otros aspectos, protección frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto quienes denuncien, principalmente, hechos y/o delitos de corrupción.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

[274] En su respuesta al cuestionario<sup>96/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[275] – La capacitación provista por el MTILCC a más de 550 servidores públicos para difundir la Ley No. 004, y la capacitación sobre la obligación de denunciar los actos de corrupción; a más de 415

---

95. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

96. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

estudiantes para animarlos a difundir la obligación a nivel familiar; y a los servidores públicos, entidades públicas y los habitantes de los 339 municipios del país.

[276] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que una vez que se haya adoptado la nueva normativa para los servidores públicos, todavía permanecerá la necesidad de proveer capacitación sobre esa nueva normativa.

[277] Por lo tanto, el Comité estima apropiado reformular la medida c) antes referida, de la siguiente manera:

[278] b) Capacitar a los servidores públicos en relación con su obligación de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento, una vez adoptadas las disposiciones, medidas y/o sistemas que establezcan dicha obligación.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Implementar un sistema de protección del funcionario público, incluida su identidad, cuando de buena fe denuncie hechos de corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[279] En su respuesta al cuestionario<sup>97/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[280] – La Ley No. 004, que en su artículo 17, establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos.

[281] Durante la visita *in situ*, los representantes del MTILCC pusieron de presente que varios funcionarios de ese Ministerio han sido víctimas de amenazas, agresiones y asaltos, como resultado del desarrollo de sus funciones relacionadas con el trámite de denuncias de actos de corrupción.

[282] En este sentido, la respuesta al cuestionario explica que el Sistema de Protección “...brindará protección contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a todas las personas que de alguna manera puedan encontrarse en peligro por la investigación de un hecho de corrupción, por lo tanto se abarca a denunciantes y testigos, peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros participantes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento.”<sup>98/</sup>

[283] Asimismo, la respuesta también pone de presente con respecto a la implementación de esta medida, que “...una limitación para el diseño y la implementación del sistema, es el tema económico. Se ha determinado que Bolivia implementará el sistema de acuerdo a sus posibilidades económicas e irá mejorando y complementando el sistema con el tiempo. Bolivia requiere contar con asistencia técnica sobre el diseño y la implementación del sistema, sobre todo tomando en cuenta que cada una

---

97. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

98. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

*de las entidades que son parte del sistema tendrán que ser fortalecidas técnicamente, con nuevas capacidades y con mayor presupuesto para lograr un sistema eficiente.”<sup>99/</sup>*

[284] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no está en operación el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos creado por la Ley No. 004.

[285] Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de que las entidades públicas cuenten con los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema y las dificultades y necesidades de cooperación técnica puestas de presente por el Estado analizado, el Comité estima del caso reformular, en dos, la medida d) de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[286] c) Asegurar que las disposiciones y medidas que pongan en pleno funcionamiento el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en el artículo 17 de la Ley No. 004, incluyan, entre otros aspectos, la protección física y laboral para los servidores públicos involucrados en la investigación y/o procesamiento de denuncias, principalmente, por hechos y/o delitos de corrupción.

[287] d) Asegurar que las instituciones que están a cargo de la implementación y funcionamiento del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos, cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de sus responsabilidades en relación con dicho Sistema; y hacer las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a esas instituciones la asistencia técnica necesaria para que las mismas puedan cumplir sus funciones de manera eficiente y eficaz, tomando en cuenta las necesidades puestas de presente e identificadas en el presente informe.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Implementar procedimientos adecuados que fomenten esta clase de denuncias.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[288] En su respuesta al cuestionario<sup>100/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[289] – La Ley No. 004, que en su artículo 35, dispone que una persona que haya participado en un delito de corrupción, y que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento del delito, se beneficiará con la reducción de dos tercios de la pena correspondiente;

[290] – El sistema informático del MTILCC, el cual permite la denuncia con reserva de identidad, por contar con los niveles de seguridad necesarios para impedir que se pueda acceder a los datos del denunciante;

---

99. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4

100. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.



[291] – La elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción por parte del Consejo de Lucha contra la Corrupción, el cual crea mecanismos para fomentar e impulsar la denuncia ciudadana de hechos de corrupción; y

[292] – El D.S. No. 29894, que en su artículo 25 requiere la creación de Unidades de Transparencia en todas las entidades del Órgano Ejecutivo. Estas unidades, en coordinación con el MTILCC, realizan el seguimiento y monitoreo de denuncias de corrupción.

[293] Los boletines informativos, banners y otros materiales distribuidos por el MTILCC en la materia, las cuales incluyen información sobre dónde y cómo presentar denuncias.<sup>101</sup>

[294] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida e) antes transcrita.

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Considerar la posibilidad de que, previo los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley de Protección a Personas que denuncian Corrupción en el Ejercicio de la Función Pública...sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[295] En su respuesta al cuestionario<sup>102/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[296] – La recopilación de información con el objeto de elaborar la base normativa del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos por hechos de corrupción.

[297] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida f) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que todavía no está en operación el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos creado por la Ley No. 004.

[298] Por otra parte, el Comité estima que la sustancia de esta medida está recogida en las medidas a), b), c) y d) de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, y por lo tanto, procederá a eliminarla.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)**

### Recomendación:

*Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.*

---

101. Véanse también los párrafos 32 al 34 en la sección 1.1 de este informe

102. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte de la Contraloría General [del Estado], establecidas en el Decreto Supremo No. 27349 de 2004, de tal manera que se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente dicha verificación* (la fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[299] En su respuesta al cuestionario<sup>103/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[300] – La Ley No. 004, la cual establece que la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas se realizará por el MTILCC<sup>104/</sup>;

[301] – El Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE), el cual sirve para centralizar e intercambiar información entre las entidades relacionadas con estos temas<sup>105/</sup>;

[302] – El Plan Piloto para la Verificación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, el cual fue diseñado y ejecutado por el MTILCC. Según la información recabada durante la visita *in situ*, el Plan duró 8 meses y consistió en la verificación de las declaraciones juradas de 150 funcionarios públicos.<sup>106/</sup> En cuanto a la selección de los participantes, se incluyeron funcionarios electos, designados, y de libre nombramiento, así como las máximas autoridades ejecutivas de instituciones o empresas estatales que reciben una alta asignación del presupuesto público.<sup>107</sup> Asimismo, se procuró incluir a funcionarios con denuncias por grave daño al Estado o indicios de responsabilidad emitida por la CGE, con un incremento superior al 60% por año, los que no presentaron la declaración jurada, sorteos aleatorios, los que participaron en licitaciones superiores a US \$1 millón, y los que contaban con un patrimonio mayor a US \$450,000<sup>108/</sup>;

[303] – Los acuerdos interinstitucionales celebrados para realizar el trabajo de verificación, entre el MTILCC y otras instituciones, incluyendo, entre otras, la CGE, el Registro de Derechos Reales, Fundempresa, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y el Servicio General de Identificación de Personal (SEGIP)<sup>109/</sup>;

[304] – El modelo de trabajo diseñado para el proceso de verificación, el cual comprendía todo desde “...la solicitud del número de cédula de identidad para la obtención de las declaraciones juradas

---

103. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

104. *Ibidem*, p. 56, *supra* nota 4

105. Véase la presentación sobre el Plan Piloto entregado por el MTILCC con ocasión de la visita *in situ*, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_blv\\_panel10.ppt#485.2.PLAN PILOTO VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_blv_panel10.ppt#485.2.PLAN%20PILOTO%20VERIFICACI%C3%93N%20DE%20DECLARACIONES%20JURADAS%20DE%20BIENES%20Y%20RENTAS)

106. *Ibidem*.

107. *Ibidem*.

108. *Ibidem*.

109. *Ibidem*. En sus comentarios al proyecto de informe preliminar, el Estado analizado informó de la existencia de un convenio interinstitucional de fecha 30 de Julio de 2011, entre el Ministerio de Transparencia, la CGE, y la UIF, para viabilizar y dar cumplimiento a la Ley No. 004 en cuanto a la entrega de las declaraciones juradas para su verificación. Asimismo, el Estado analizado informó que a partir de la emisión del Decreto Supremo No. 1233, se consolidó este compromiso.

*ante la [CGE], el análisis patrimonial, la solicitud de información a los registros públicos y privados y también la elaboración de un informe de resultados por parte del [MTILCC]”<sup>110/</sup>;y*

[305] – Los talleres realizados con los responsables de las instituciones, para socializar el modelo de trabajo en cuanto a la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, para dinamizar el trabajo y asegurar el cumplimiento de plazos y la obtención de resultados, entre otros aspectos.

[306] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe. En este sentido, el Comité observa que aunque la CGE tiene la facultad legal de recibir las declaraciones juradas y de verificarlas a petición de parte, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE explicaron que en los últimos 20 años sólo habían recibido una solicitud de esa naturaleza, y que por lo tanto, la CGE no ha realizado ninguna otra verificación.

[307] Asimismo, el Comité toma nota de que el MTILCC ahora cuenta con la responsabilidad de verificar de oficio las declaraciones juradas y con una Plan Piloto para ese fin.

[308] El Comité también toma nota de las limitaciones puestas de presente durante la visita *in situ* con respecto al Plan Piloto, incluyendo, entre otras: las demoras en la obtención de información para consolidar el listado de personas a ser verificadas y en la entrega de las declaraciones juradas; la necesidad de mejorar el control de las declaraciones juradas para que cuenten con información adecuada; la inexistencia de una base de datos consolidada en derechos reales, la cual dificulta la entrega oportuna de información y también tener criterios sobre la razonabilidad de los bienes; demora en la entrega de información de cédulas de identidad debido a cambios en la institución policial; y la falta de precisión de las diferencias entre investigación y verificación de declaraciones juradas y si el Plan Piloto incluía a los bienes de los familiares.<sup>111/</sup> Similarmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE relataron las dificultades consistentes en la demora de los registros públicos en proveer la información solicitada y la falta de un registro de bienes muebles.

[309] En consecuencia, el Comité considera del caso reformular la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[310] a) Fortalecer los procesos de recepción por parte de la CGE de las declaraciones juradas de bienes y rentas, a través de la adopción de las medidas que se estimen necesarias para agilizar y facilitar la presentación de las declaraciones; eliminar la demora de los registros públicos para proveer la información necesaria; sistematizar las declaraciones recibidas; y crear una base de datos consolidada en materia de derechos reales, entre otras.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Analizar la conveniencia de que la Contraloría General [del Estado], como el organismo encargado de la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, las revise periódicamente, aunque no sea la totalidad de éstas. Por ejemplo, podría actuar de oficio seleccionando un número aleatorio de declaraciones a revisar cada año, a fin de ejercer efectivamente el control que le corresponde de acuerdo a su competencia. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

---

110. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 57, *supra* nota 4.

111. *Ibidem*, p. 58, *supra* nota 4.

[311] En su respuesta al cuestionario<sup>112/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la implementación de la medida b) de la sección 2 de este informe, incluyendo la Ley No. 004, que establece que la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte del MTILCC y el Plan Piloto desarrollado por el mismo Ministerio, como se menciona en los párrafos 296 a 304 del presente informe.

[312] Por lo tanto y considerando que ya existe una institución encargada específicamente de la verificación de oficio del contenido de las declaraciones juradas, y que el Plan Piloto de dicha verificación ha concluido, el Comité considera del caso reformular la medida “c” de la sección 2 del capítulo IV del presente informe de la siguiente manera:

[313] b) Asegurar la existencia de criterios objetivos de selección de los servidores públicos cuyas declaraciones juradas se verificarán de oficio por la MTILCC.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, dada su estrecha vinculación con este tema.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[314] En su respuesta al cuestionario<sup>113/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, el siguiente:

[315] – La Ley No. 004, que en su artículo 27 tipifica el delito de enriquecimiento ilícito de la siguiente manera: “*La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.*”

[316] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida c) antes transcrita, sin perjuicio de las recomendaciones de similar naturaleza formuladas durante la Tercera Ronda, la implementación de las cuales se analizarán más a detalle durante el seguimiento de esa Ronda.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los servidores públicos que de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Control Externo denominada “Procedimiento de Notificación de Incorporaciones y Retiros de Servidores Públicos para el control de las DJBR” (CE/17), están obligados a hacerlo, suministren la información requerida por el mecanismo de control previsto en dicha norma, en los plazos establecidos en la misma.* (la fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

---

112. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

113. *Ibidem*, p. 59, *supra* nota 4.

[317] En su respuesta al cuestionario<sup>114/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[318] – El artículo 225 de la CPE, que requiere la presentación de declaración jurada de bienes y rentas por parte de todos los servidores públicos, antes, durante y después del ejercicio de la función pública;

[319] – El artículo 149 de la Ley No. 004, el cual tipifica como delito la omisión de declaración de bienes y rentas.

[320] Asimismo, con respecto a la implementación de esta medida, la respuesta al cuestionario explica que “[l]a norma sobre el “Procedimiento de Notificación de Incorporaciones y Retiros de Servidores públicos para el Control del DJBR” es clara y es cumplida por las entidades públicas que reportan de forma trimestral a la Contraloría General del Estado, todas las personas que en este periodo de tiempo dejaron e ingresaron en la institución.”<sup>115/</sup>

[321] El Comité observa lo manifestado por el Estado analizado, en el sentido de que el procedimiento establecido se está observando y que las entidades públicas están informando a la CGE todas las incorporaciones y retiros. Asimismo, el Comité observa que la obligación de presentar declaraciones juradas está ahora plasmada en la CPE. En vista de estas consideraciones, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida d) antes transcrita.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, y adoptar las medidas que correspondan, de tal manera que dichas declaraciones sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, así como para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito, una vez que se tipifique este delito.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[322] En su respuesta al cuestionario<sup>116/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[323] – El Plan Piloto para la Verificación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, el cual fue diseñado y ejecutado por el MTILCC, y que “...consiste en la constatación del patrimonio de la ex servidora y ex servidor público o la servidora y servidor público mediante la búsqueda y el análisis integral de la información patrimonial incluso de aquella no declarada.”<sup>117/</sup>

[324] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida e) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el país está

---

114. *Ibidem*, p. 49, *supra* nota 4.

115. *Ibidem*.

116. *Ibidem*, p. 60, *supra* nota 4, También véase el párrafo 293 del presente Informe.

117. *Ibidem*, p. 60, *supra* nota 4.

todavía inmerso en el proceso de desarrollo de los sistemas y mecanismos necesarios para la efectiva verificación del contenido de las declaraciones juradas de bienes y servicios.

[325] Sin embargo, considerando que el Estado analizado ya ha tipificado el delito del enriquecimiento ilícito, el Comité considera del caso reformular la medida de la siguiente manera, eliminando la referencia a la eventual tipificación del delito:

[326] c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas, y adoptar las medidas que correspondan, de tal manera que dichas declaraciones sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, así como para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Ampliar el número de funcionarios cuya declaración deba ser publicada, teniendo en cuenta su categoría y/o la naturaleza de sus funciones.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[327] En su respuesta al cuestionario<sup>118/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que permite una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, lo siguiente:

[328] – El artículo 33 del Reglamento de DD.JJ de Bienes y Rentas, la cual establece que “*Las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, así como las actualizaciones respectivas, de los funcionarios públicos electos, designados, de libre nombramiento, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros funcionarios, será publicadas a excepción de aquellos funcionarios que cumplen “Funciones de Salud” y “Funciones de Apoyo y Servicio en la Administración Pública. La publicación se efectuará a través de la Página Web de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, publicándose los Nombres, Apellidos, Carnet de Identidad, Fecha de la Declaración, Total de Bienes, Total de Deudas y Total Rentas de la última declaración o actualización efectuada. Por otra parte, cuando el servidor deje la función pública, a momento de declarar por la conclusión laboral, se excluirá de la publicación la última declaración o actualización publicada por la página Web, asimismo, de las personas que no lleguen a ser servidores públicos por no haberse hecho efectiva la designación y posesión en un cargo público.*”

[329] El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado ha ampliado considerablemente la categoría y número de servidores públicos cuyos valores totales consolidados de bienes, rentas y deudas de sus declaraciones deben ser publicados, toma nota de la consideración satisfactoria de la medida f) antes transcrita.

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Analizar la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales no solo abarquen al funcionario público sino también a su cónyuge, parientes cercanos y terceros relacionados con él.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

---

118. *Ibidem*, p. 60, *supra* nota 4. También véase el párrafo 293 del presente Informe.

[330] En su respuesta al cuestionario<sup>119/</sup>, el Estado analizado presenta información y desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[331] – El formulario de declaraciones juradas de bienes y rentas (Resolución No. CGR/088/2004) que contiene en su parte final información que debe brindar el servidor público sobre su entorno familiar más cercano. Al respecto, el Estado analizado señala en su respuesta que “[l]a Constitución Política del Estado, establece sólo la obligatoriedad de que los servidores públicos realicen sus declaraciones juradas, pero dentro de la verificación de las declaraciones, si se determina que existe desvío de fondos a familiares cercanos, de forma excepcional se realizarán investigaciones al respecto.”

[332] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida g) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que si bien el formulario de declaraciones juradas de bienes y rentas requiere información sobre los parientes del declarante, no se exige que se suministre la información patrimonial de los mismos.

[333] En consecuencia, el Comité considera del caso reformular la medida g) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[334] d) Adecuar, a través de las medidas que estime necesarias, el formulario de declaraciones juradas de bienes y rentas de modo que éste requiera no sólo la información patrimonial del servidor público respectivo, sino también, como mínimo, la de su cónyuge.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación:

*Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

[335] En su respuesta al cuestionario<sup>120/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[336] – La creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, por el artículo 6° de la Ley No. 004 con las funciones, entre otras, de proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción, integrado por el MTILCC, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la

---

119. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 59, *supra* nota 4.  
120. *Ibidem*, p. 60, *supra* nota 4.

Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado y representantes de la sociedad civil organizada, presidido por el titular del MTILCC.

[337] – La emisión de un Reglamento Nuevo Interno de los procedimientos de Declaraciones Juradas del 18 de febrero de 2011, para la CGE; y

[338] – La promulgación de la Ley de la Procuraduría General del Estado, y la creación de esa institución.

[339] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de la sección 3 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que salvo la PGE, todas las instituciones con las cuales se sostuvieron reuniones con ocasión de la visita *in situ*, manifestaron el hecho que dificultades presupuestarias están afectando la capacidad de las mismas de cumplir cabalmente con sus respectivos labores en cuanto a la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción.

[340] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de una confederación empresarial, señalaron su preocupación con lo que denominaron el debilitamiento de la CGE en los últimos años. A manera de ejemplo, señalaron que aunque el artículo 214 de la CPE requiere la designación del Contralor por la Asamblea Plurinacional, por un tiempo significativo este cargo ha sido ejercido por una persona designada por el Ejecutivo.

[341] La calidad de interino del Contralor y las dificultades con respecto a su nombramiento fueron confirmadas en la reunión sostenida con la CGE durante la visita *in situ*, donde fue puesto de presente que existe una contradicción entre los artículo 214 antes citado y el inciso 15 del artículo 172 constitucionales, que establece como facultad del Presidente del Estado, el nombramiento del Contralor de una terna presentada por la Asamblea Plurinacional.

[342] El Comité, teniendo en cuenta las importantes funciones desarrolladas por al CGE en cuanto a la prevención, detección e investigación de actos de corrupción, incluyendo, entre otras, la fiscalización externa de las entidades públicas y las funciones relativas a la recepción y manejo de las declaraciones juradas de bienes y rentas, estima conveniente que el Estado analizado resuelva la contradicción entre las disposiciones constitucionales 172 y 214, y proceda al nombramiento del Contralor en los términos previstos en la CPE, o sea a través de su elección por la Asamblea Legislativa, o a través de un nombramiento del Presidente, basado en una terna presentada por aquella.

[343] Por lo tanto y considerando que ya se han formulado recomendaciones destinadas a fortalecer a los demás órganos de control en el capítulo II del presente informe<sup>121/</sup>, el Comité estima del caso reformular la recomendación de la sección 3 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[344] 3.1. Revisar, con el objeto de designar a la brevedad a la Contralora o Contralor General del Estado, la posible contradicción existente entre lo dispuesto por el artículo 172, numeral 15, y el artículo 214 constitucionales.

---

121. Véanse las secciones las secciones 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 y 5.4, respectivamente, del capítulo II del presente informe.



[345] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGE pusieron de presente otras dificultades que están afectando negativamente a la institución, incluyendo el congelamiento del presupuesto de la CGE durante los últimos 10 años; y la falta de recursos presupuestarios y humanos para cumplir con sus objetivos. En este contexto, explicaron que en 2011, 28 funcionarios de la CGE eran responsables del recibo y manejo de más de 161,000 declaraciones juradas de bienes y rentas.

[346] Por lo tanto, el Comité, teniendo en cuenta la importancia de superar las anteriores dificultades, formula la siguiente recomendación:

[347] 3.2. Dotar a la CGE con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la recepción y manejo de las declaraciones juradas de bienes y rentas.

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **4.1. Mecanismos de participación en general**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

##### **4.2. Mecanismos para el acceso a la información**

###### Recomendación:

*Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer información. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley de Acceso a la Información al que se alude en la sección 4.2.2 del capítulo II del presente informe [Informe de la Primera Ronda], sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).*

[348] En su respuesta al cuestionario<sup>122/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[349] – El inciso 6 del artículo 21 de la CPE, el cual consagra el derecho de todo boliviano y boliviana de acceder a la información.

---

122. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 65, *supra* nota 4

[350] – El anteproyecto de Ley de Acceso a la Información y la socialización del mismo a través del país.

[351] – La nueva versión del anteproyecto de Ley de Acceso a la Información, modificado con base en las observaciones de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y el Sindicato de la Prensa de La Paz y remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

[352] – La guía básica de acceso a la información elaborada por el MTILCC, la cual es utilizada mientras se aprueba la Ley de Acceso a la Información.

[353] Con respecto al anteproyecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la ANP expresaron su preocupación debido a que no tienen conocimiento sobre el estatus del mismo desde 2011, cuando dieron sus observaciones y fueron informados que el anteproyecto tenía que ser actualizado.

[354] Asimismo, la ANP manifestó que las 19 respuestas a una encuesta enviada a 32 instituciones a través de “cartas de consulta”, demostraron, entre otras, una falta de conocimiento de la obligación de proveer información; un sentido de propiedad de la información por parte de los funcionarios públicos; escasa capacitación en la materia; frecuente rotación de los servidores públicos responsables de proveer información; y un sentimiento de incapacidad por parte de la sociedad para solicitar información.

[355] En un sentido similar, los representantes de una federación de prensa, notaron durante la visita *in situ*, la limitación que estiman existe al momento con respecto al ejercicio del derecho a la información, incluyendo, entre otras, la demora de las instituciones para responder a solicitudes de información; la necesidad de mayor y mejor divulgación sobre este derecho y la obligación del Estado de proveer información y la creación de canales permanentes y eficientes de comunicación entre las instituciones públicas, principalmente en el ámbito departamental. Los representantes de la federación de prensa hicieron hincapié, igualmente, en que la normativa que se apruebe para regular el acceso a la información debe contar con disposiciones que sancionen a quienes vulneren el derecho de acceso a la información e incumplan con su obligación de proveerla.

[356] Por otra parte, también durante la visita *in situ*, los representantes de una organización social, destacaron la existencia de un formulario estándar para solicitar información, el cual está disponible en portales en Internet de las instituciones gubernamentales.

[357] Con respecto a la denegación de información solicitada, en la visita *in situ*, los representantes del MTILCC explicaron que éste tiene la facultad, entre otras que la ley le concede, de presentar, a petición de cualquier persona o servidor público que tenga conocimiento de negación de acceso a la información, denuncias por tal acto ante las autoridades competentes, para lo cual el MTILCC acumula, valora y sistematiza la información presentada, apoyándose en algunos casos del Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Si el MTILCC considera que cuenta con información suficiente, procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público o a la instancia disciplinaria que corresponda y le dará seguimiento. Pero si el MTILCC considera que la información no es suficiente, no presentará la denuncia pero dejará a salvo el derecho de la persona o servidor público interesado para acudir directamente ante las autoridades competentes para presentar la misma denuncia.

[358] En vista de la necesidad de contar con una ley sobre la materia expuesta por los representantes del Estado analizado y de la sociedad civil durante la visita *in situ*, el Comité considera del caso reformular la medida a) de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[359] a) Considerar la adopción de una normativa específica en materia de acceso a la información, con disposiciones que desarrollen y reglamenten, entre otros aspectos, los procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer información.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[360] En su respuesta al cuestionario<sup>123/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[361] – La elaboración de un programa de capacitación a servidores públicos y organizaciones sociales sobre temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción, el cual ha resultado, entre otros, en la capacitación de 415 estudiantes en valores éticos y medidas de prevención; la realización de 6 ferias de transparencia y lucha contra la corrupción; la capacitación de 29,549 servidores públicos en temas de transparencia, incluyendo el acceso a la información; la capacitación a 267 organizaciones sociales; y la elaboración de 7 juegos didácticos que promueven la práctica de valores y enseñan la normativa de prevención y lucha contra la corrupción. El sexto de estos juegos, intitulado “la ruleta de acceso a la información”, tiene el objetivo de “...promover el ejercicio pleno y efectivo del derecho de toda persona al acceso a la información pública, como mecanismo fundamental de la lucha contra la corrupción.”<sup>124/</sup>

[362] – El proceso de capacitación proveída a las instituciones públicas por el MTILCC, sobre la necesidad de que todas cuenten con portales en Internet, donde el público puede acceder a la información necesaria y para incrementar la transparencia en cuanto a sus actividades. Para este fin, la respuesta al cuestionario pone de presente que el MTILCC elaboró una guía de estandarización de páginas en Internet del Estado y que empezando en 2012, se realizará un plan piloto de estandarización de páginas en Internet del cual será parte del MTILCC y el Ministerio de Comunicación.

[363] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que una vez adoptada la nueva ley sobre la materia, habrá la necesidad de proveer capacitación en

---

123. *Ibidem*, p. 65, *supra* nota 4.

124. *Ibidem*, p. 68, *supra* nota 4.

relación a la misma. Asimismo, el Comité toma nota de las limitaciones con respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información, expuestas por la ANP y la FTPLP durante la visita *in situ*.<sup>125/</sup>

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a la información pública, a fin de garantizar el cumplimiento de tal procedimiento.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[364] En su respuesta al cuestionario<sup>126/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[365] – El proceso de fortalecimiento de las páginas en Internet de las entidades públicas antes descritas.

[366] – El sistema de control de contenido y actualización de las páginas en Internet, el cual consiste, entre otros, en el control mensual de las páginas de las entidades del Ejecutivo y el formulario desarrollado para este fin por el MTILCC.

[367] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que la información provista por el Estado analizado no se refiere a un análisis o evaluación de la eficacia o funcionamiento del procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden solicitar y recibir información pública, tal como sugiere la medida.

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente.

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

Recomendación:

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

---

125. Véase párrafos 347 y 348 del presente informe.

126. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 71, *supra* nota 4.

[368] En su respuesta al cuestionario<sup>127/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[369] – La participación y el control social previstos en los artículos 241 y 242 de la CPE.

[370] – La Ley No. 004, que en su artículo 10 dispone que son derechos y atribuciones del control social, identificar y denunciar hechos de corrupción y falta de transparencia ante las autoridades competentes, tal como coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción.

[371] – La inclusión de representantes de la sociedad civil organizada en el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en virtud de lo previsto en el artículo 6º de la Ley No. 004.

[372] – La participación activa en el Consejo antes referido, de 394 organizaciones sociales en espacios de control social a nivel nacional.

[373] – El proyecto de Ley de Control Social que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

[374] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta, como fue puesto de presente durante la visita *in situ*, que falta una ley u otra normativa que regule el control social previsto en los artículos 241 y 242 de la CPE.

[375] Por lo tanto, considerando que el Estado analizado ya ha establecido mecanismos adicionales para fortalecer la participación de la sociedad civil en la gestión pública, el Comité estima del caso reformular la medida a) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera:

[376] a) Considerar la adopción de la normativa que establezca el marco general para el ejercicio del control social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 constitucional.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Regular el funcionamiento del mecanismo de Iniciativa Legislativa Ciudadana previsto en la Constitución Política, a través del acto legal que corresponda, a efectos de que la ciudadanía pueda hacer uso efectivo del mismo.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[377] En su respuesta al cuestionario<sup>128/</sup>, el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior medida “*Se presentaron en la asamblea legislativa algunos intentos de normar este aspecto, los cuales aun no prosperaron y aun existe un vacío legislativo en este tema.*”

---

127. *Ibidem*, p. 70, *supra* nota 4.

128. *Ibidem*, p. 74, *supra* nota 4.

[378] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Considerar la posibilidad, según convenga y de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, de derogar las denominadas “leyes de desacato”.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[379] En su respuesta al cuestionario<sup>129/</sup>, el Estado analizado informa lo siguiente con respecto a la anterior medida *“Se están trabajando en la redacción de un nuevo Código Penal que está considerando la inclusión o la eliminación de varios tipos penales, pero a la fecha dicho trabajo no se encuentra concluido.”*

[380] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Evaluar periódicamente el desarrollo de las atribuciones que se le han asignado a las Redes Ciudadanas Anticorrupción, a las que se ha hecho referencia en la sección 4.1.1 de este informe [informe de la Primera Ronda].* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[381] En su respuesta al cuestionario<sup>130/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca:

[382] - Los artículos 241 y 242 constitucionales, que reconocen y regulan la participación y el control social, otorgándole atribuciones para poder ejercer dicho control en todas las instancias del estado y con amplia participación de toda la sociedad civil organizada.

[383] – Las consultas a nivel nacional hechas por el MTILCC sobre los puntos que debería contener la Ley de Control Social por mandato del artículo 241 constitucional.

[384] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, los representantes del MTILCC pusieron de presente que estas “Redes Ciudadanas” dejaron de existir a partir de las nuevas políticas gubernamentales sobre la participación ciudadana.

[385] A la luz de lo anterior y teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la participación de la sociedad civil, consagrado en la Constitución, el Comité considera que la medida (a) anterior no es vigente, por lo que procederá su eliminación.

---

129. *Ibidem*, p. 74, *supra* nota 4.

130. *Ibidem*, p. 76, *supra* nota 4.

#### 4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

##### Recomendación:

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[386] En su respuesta al cuestionario<sup>131/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que permite una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, lo siguiente:

[387] – El proceso de rendición de cuentas y el incremento en la participación en la misma por parte de las entidades públicas. En este sentido, la respuesta al cuestionario demuestra que en 2007, 5 entidades participaron en el proceso, mientras que en 2011, estaba prevista la participación de 366 entidades públicas en el proceso de rendición de cuentas.

[388] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) antes transcrita, teniendo en cuenta que el sistema de rendición de cuentas públicas en el Estado analizado, en la cual están obligados a participar todas las entidades públicas y sirve como un mecanismo útil para facilitar a las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión pública. Asimismo, el Comité considera que la inclusión de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas también sirve para este fin.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[389] En su respuesta al cuestionario<sup>132/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos, que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[390] – El plan de capacitación elaborado por el MTILCC a las organizaciones de la sociedad civil para el ejercicio del control social y su participación eficiente en las rendiciones públicas de cuentas. Este plan ha capacitado a 24,742 representantes de organizaciones sociales.

---

131. Véase respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia al cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, p. 78, *supra* nota 4.

132. *Ibidem*, p. 79, *supra* nota 4.

[391] – Los boletines informativos emitidos por el MTILCC y su memoria institucional anual, que sirven para difundir los mecanismos de participación ciudadana.

[392] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida b) antes transcrita, teniendo en cuenta que el Estado analizado ha diseñado y puesto en operación programas de difundir los mecanismos de participación ciudadana existentes, y también ha proveído capacitación a la sociedad civil con respecto a esos mecanismos.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 5.1:

*Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales [el Estado Plurinacional] de Bolivia considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.*

*Así también, [el Estado Plurinacional] de Bolivia, debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.* (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[393] En su respuesta al cuestionario<sup>133/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, el siguiente:

[394] – La determinación de que el Estado analizado requiere asistencia técnica con respecto a los siguientes temas: 1) recuperación de bienes a favor del Estado; 2) intercambio de información para el SIIARBE; 3) verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas; 4) transferencia de metodologías y experiencias en temas de prevención; 5) desarrollo de políticas preventivas; 6) fortalecimiento y consolidación de la implementación y aplicación del programa de transparencia; y 7) fortalecimiento del equipo del MTILCC con conocimientos especializados en materia de investigación de actos de corrupción.<sup>134/</sup>

[395] La respuesta al cuestionario también pone de presente que el Estado analizado está dispuesto a ofrecer asistencia técnica y compartir experiencias positivas con los demás Estados Parte en cuanto a mecanismos de control social, rendición de cuentas y ética pública.

[396] El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado ha determinado y priorizado las áreas en donde necesita cooperación técnica y que ya se han formulado recomendaciones sobre las necesidades expuestas en los acápites pertinentes del presente informe, toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 5.1 antes transcrita.

---

133. *Ibidem*, p. 79, *supra* nota 4.

134. *Ibidem*, p. 80, *supra* nota 4.



Recomendación 5.2:

*Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.* (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[397] En su respuesta al cuestionario<sup>135/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que permiten una determinación de que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[398] – Los encuentros y seminarios internacionales realizados, los cuales “...son espacios de intercambio de información y donde se presentan procesos de trabajo que es una forma de transferir conocimiento a los representantes de los diferentes organismos y países que participan, de igual forma la asistencia de Bolivia a eventos internacionales también existe posibilidad de intercambio de conocimientos”<sup>136/</sup>; y

[399] – La participación del Estado analizado en conferencias anticorrupción organizadas por la OEA y en el marco del “Open Government Partnership” (OGP), entre otras.

[400] El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado ha continuado los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 5.2 antes transcrita.

Recomendación 5.3:

*Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por [el Estado Plurinacional] de Bolivia.*

*Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.* (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[401] En su respuesta al cuestionario<sup>137/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[402] – Los eventos destinados a servidores públicos y organizaciones sociales que ha organizado el MTILCC, tales como: seminarios internacionales sobre transparencia y lucha contra la corrupción, acceso a la información y periodismo y servicio de atención al ciudadano; feria de buenas prácticas, a través de la Comunidad Andina de Naciones; y un seminario internacional sobre las Convenciones de la OEA y la ONU, y la implementación de las mismas en Bolivia<sup>138/</sup>;

---

135. *Ibidem*, p. 80, *supra* nota 4.

136. *Ibidem*, p. 80, *supra* nota 4.

137. *Ibidem*, p. 81, *supra* nota 4.

138. *Ibidem*, p. 81, *supra* nota 4.

[403] – La creación por parte del MTILCC del Instituto Boliviano de Estudios de Transparencia (IBEC) en junio del 2011, cuyos objetivos son, entre otros, promover y ejecutar investigaciones estratégicas en transparencia, corrupción y ética para contribuir a la formación y debate de políticas públicas, ampliar la comprensión y conocimiento de la problemática de la corrupción en Bolivia e incidir en políticas públicas a partir de la articulación con la sociedad civil y movimientos sociales, contribuir a la lucha contra la corrupción a partir de la capacitación y formación en transparencia y lucha contra la corrupción, y reducir los niveles de tolerancia de la corrupción en la población a partir de procesos de información y sensibilización<sup>139/</sup>; y

[404] – La creación por el IBEC en forma conjunta con la Universidad Andina Simón Bolívar, de un diplomado dirigido a fiscales anticorrupción, policías de la división de lucha contra la corrupción, personal de la UIF y del MTILCC, para cumplir con la especialización requerida por la Ley No. 004 y fortalecer la investigación de casos de corrupción y la recuperación de bienes.

[405] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.3 de la sección 5 del capítulo IV de este informe, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que aunque el Estado analizado ha desarrollado e implementado un programa de difusión y capacitación a través de las actividades desarrolladas en la materia por el MTILCC y el IBEC, respectivamente, no se indica que hay un programa integral de difusión y capacitación con respeto a las disposiciones relativas a la asistencia recíproca, como sugiere la recomendación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que le dé atención adicional a la implementación de la misma.

#### Recomendación 5.4:

*Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperación técnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda técnica de organismos internacionales y de agencias de cooperación, en la lucha contra la corrupción.* (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda).

[406] En su respuesta al cuestionario<sup>140/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[407] Las evaluaciones realizadas por donantes con respecto los distintos programas y proyectos financiados con fondos externos, tales como la evaluación realizada por el PNUD sobre “...*todos sus programas de técnica a nivel de resultados, por proyecto, por programa e identificando buenas prácticas y estudios de casos...*”<sup>141/</sup>

[408] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.4 antes transcrita, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el Estado analizado no relaciona el haber realizado por sí misma alguna actividad de medición, análisis o evaluación en el sentido de la recomendación.

---

139. *Ibidem*, p. 81, *supra* nota 4.

140. *Ibidem*, p. 81, *supra* nota 4.

141. *Ibidem*, p. 83, *supra* nota 4.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

La recomendación 7.1 fue considerada satisfactoriamente.

### Recomendación 7.2:

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.*

### Recomendación 7.3:

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo*

[409] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a las recomendaciones 7.2 y 7.3 antes transcritas. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que le dé atención adicional a la implementación de la misma.

## **ANEXO I**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### Recomendación:

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.

###### Medidas sugeridas:

- a) Complementar las normas existentes, regulando, cuando corresponda, ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de manera más detallada y específica.
- b) Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los individuos, analizar el mejoramiento y fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes restricciones para quienes dejan de desempeñar un cargo público y de las medidas para hacerlas efectivas.
- c) c) Asegurar que todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 (Estatuto del Funcionario Público), adopten a la brevedad sus códigos de ética a que se refiere el artículo 13 de esta Ley y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, e implementen mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos o instrumentos, entre otras, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.
- d) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la prevención de conflictos de intereses.
- e) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, entre ellas, las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

## **1.2. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

### Recomendación

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de los recursos de la administración pública.

### Medidas sugeridas:

- a) Asegurar que todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 2027 (Estatuto del Funcionario Público), adopten a la brevedad sus Códigos de Ética a que se refiere el artículo 13 de esta Ley y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, e implementen mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones que se prevean en dichos Códigos y/o instrumentos, entre otras, las relacionadas con la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.
- b) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética que se adopten, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la preservación de los recursos públicos.
- c) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética y/u otros instrumentos que establezcan principios básicos de ética, entre ellas, las relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.
- d) Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Bolivia, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.

## **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

### Recomendación:

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Adoptar e implementar las disposiciones y medidas que sean necesarias para poner en funcionamiento el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en el artículo 17 de la Ley No. 004; y asegurar que las disposiciones y medidas que se adopten incluyan, entre otros aspectos, protección frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto quienes denuncien, principalmente, hechos y/o delitos de corrupción.
- b) Capacitar a los servidores públicos en relación con su obligación de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento, una vez adoptadas las disposiciones, medidas y/o sistemas que establezcan dicha obligación.
- c) Asegurar que las disposiciones y medidas que pongan en pleno funcionamiento el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos previsto en el artículo 17 de la Ley No. 004, incluyan, entre otros aspectos, la protección física y laboral para los servidores públicos involucrados en la investigación y/o procesamiento de denuncias, principalmente, por hechos y/o delitos de corrupción.
- d) Asegurar que las instituciones que están a cargo de la implementación y funcionamiento del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos, cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de sus responsabilidades en relación con dicho Sistema; y hacer las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a esas instituciones la asistencia técnica necesaria para que las mismas puedan cumplir sus funciones de manera eficiente y eficaz, tomando en cuenta las necesidades puestas de presente e identificadas en el presente informe.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación:

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a) Fortalecer los procesos de recepción por parte de la CGE de las declaraciones juradas de bienes y rentas, a través de la adopción de las medidas que se estimen necesarias para agilizar y facilitar la presentación de las declaraciones; eliminar la demora de los registros públicos para proveer la información necesaria; sistematizar las declaraciones recibidas; y crear una base de datos consolidada en materia de derechos reales, entre otras.
- b) Asegurar la existencia de criterios objetivos de selección de los servidores públicos cuyas declaraciones juradas se verificarán de oficio por la MTILCC.
- c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas, y adoptar las medidas que correspondan, de tal manera que dichas declaraciones sirvan como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses, así como para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

- d) Adecuar, a través de las medidas que estime necesarias, el formulario de declaraciones juradas de bienes y rentas de modo que éste requiera no sólo la información patrimonial del servidor público respectivo, sino también, como mínimo, la de su cónyuge.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 3.1.

Revisar, con el objeto de designar a la brevedad a la Contralora o Contralor General del Estado, la posible contradicción existente entre lo dispuesto por el artículo 172, numeral 15, y el artículo 214 constitucionales.

#### Recomendación 3.2.

Dotar a la CGE con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas con la recepción y manejo de las declaraciones juradas de bienes y rentas.

### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)**

#### **4.1. Mecanismos de participación en general**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

#### **4.2. Mecanismos para el acceso a la información**

##### Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública.

##### Medidas sugeridas:

- a) Considerar la adopción de una normativa específica en materia de acceso a la información, con disposiciones que desarrollen y reglamenten, entre otros aspectos, los procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer información.
- b) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.
- c) Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a la información pública, a fin de garantizar el cumplimiento de tal procedimiento

#### **4.3. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

##### Medidas sugeridas:

- a) Considerar la adopción de la normativa que establezca el marco general para el ejercicio del control social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 constitucional.
- b) Regular el funcionamiento del mecanismo de Iniciativa Legislativa Ciudadana previsto en la Constitución Política, a través del acto legal que corresponda, a efectos de que la ciudadanía pueda hacer uso efectivo del mismo.
- c) Considerar la posibilidad, según convenga y de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, de derogar las denominadas “*leyes de desacato*”.

#### **4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente.

### **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCION)**

##### Recomendación 5.1:

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

##### Recomendación 5.2:

Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperación técnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda técnica de organismos internacionales y de agencias de cooperación, en la lucha contra la corrupción

### **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCION)**

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.



## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.1:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.2 siguiente

### Recomendación 7.2:

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO 2

**AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* AL  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

<b><u>Domingo, 25 de marzo de 2012</u></b>	
18:00 hrs. – 19:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
19:00 hrs. – 20:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
<b><u>Lunes, 26 de marzo de 2012</u></b>	
07:30 hrs. – 08:15 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Saludo de bienvenida por parte de la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Doctora Nardi Suño.</b>
08:30 hrs. – 09:40 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.</b>
	<b>Tema:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></li></ul>
	<u>Participantes:</u> <i>Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)</i> Ivar Fernando Zabaleta, Gerente General <i>Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)</i> Rodrigo Agreda, Secretario Ejecutivo <i>Colegio de Contadores de Bolivia</i> Jaime Pacheco, Presidente del Consejo Nacional Técnico de Contabilidad y Auditoría
09:50 hrs. – 11:15 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación).</b>
	<b>Tema:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mecanismos de participación ciudadana.</b></li></ul>
	<u>Participantes:</u>

	<p><i>Héctor Arce</i></p> <p>Docente de la Universidad Andina</p> <p><i>Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)</i></p> <p>Serapio Marca, Secretario de Tierra, Territorio y Ecología</p> <p><i>Central Obrera Boliviana (COB)</i></p> <p>Juan Luis Delgado, Secretario de Integración y Desarrollo Regional</p>
11:20 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<p><b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)</b></p>
	<p><b>Tema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acceso a la información.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Asociación Nacional de la Prensa (ANP)</i></p> <p>Franz Reynaldo Chávez, Coordinador</p> <p><i>Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP)</i></p> <p>Boris Quisberth, Secretario Ejecutivo</p> <p><i>Organización Matriz de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla”</i></p> <p>Máxima Apaza, Secretaria Ejecutiva</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<p><b>Almuerzo</b></p>
14:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<p><b>Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC)</b></p>
14:00 hrs. – 15:20 hrs.	<p><b>Panel 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de control interno.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Nardi Sucho, Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción</p> <p>Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y</p>

	Transparencia Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción
15:30 hrs. – 16:40 hrs.	<b>Panel 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Difusión de sus objetivos y funciones.</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción Roxana Duarte, Directora General de Asuntos Jurídicos Jessica Saravia, Directora General de Investigación de Hechos de Corrupción Ricardo Céspedes, Director General de Recuperación de Bienes
16:50 hrs. – 18:00 hrs.	<b>Panel 3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Información sobre buena práctica con relación a sus funciones.</b></li> <li>• <b>Necesidades de cooperación técnica.</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción Roxana Duarte, Directora General de Asuntos Jurídicos Jessica Saravia, Directora General de Investigación de Hechos de Corrupción Ricardo Céspedes, Director General de Recuperación de Bienes
18:30 hrs. – 19:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión informal<sup>142/</sup></b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b><u>Martes, 27 de marzo de 2012</u></b>	
09:00 hrs. – 10:50 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Procuraduría General del Estado (PGE)</b>

142. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

09:00 hrs. – 09:45 hrs.	<p><b>Panel 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de control interno.</b></li> <li>• <b>Régimen presupuestal.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Hugo Montero, Procurador General del Estado  César Romano, Subprocurador de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública  Danny López, Director General de Producción Normativa</p>
09:50 hrs. – 10:50 hrs.	<p><b>Panel 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Difusión de sus objetivos y funciones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas</b></li> <li>• <b>Resultados en relación con cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Hugo Montero, Procurador General del Estado  César Romano, Subprocurador de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública  Danny López, Director General de Producción Normativa</p>
11:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)</b> <sup>143</sup>
11:00 hrs. – 11:45 hrs.	<p><b>Panel 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de control interno.</b></li> </ul>

143. Con el acuerdo del Subgrupo de Análisis, antes de iniciar las reuniones previstas para el cuarto día de la visita, tuvo lugar un breve encuentro con la Directora de la UIF para conversar sobre los paneles 6 y 7.

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Mariela Sánchez, Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras</p> <p>Marco López, Asesor Jurídico</p> <p>Aldo Salinas, Asesor Jurídico</p>
11:45 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Panel 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultados.</b></li> <li>• <b>Difusión de sus objetivos y funciones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Mariela Sánchez, Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras</p> <p>Marco López, Asesor Jurídico</p> <p>Aldo Salinas, Asesor Jurídico</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<b>Almuerzo</b>
14:00 hrs. – 17:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Ministerio Público/Fiscalía General del Estado</b>
	<p><b>Panel 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Weimar Guzmán, Fiscal General en Suplencia Legal</p> <p>Víctor Hugo Cuellar, Secretario General</p> <p>José Gutiérrez, Director de Gestión Fiscal</p> <p>Norma Olmos, Coordinadora Nacional Anticorrupción</p>
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

<b><u>Miércoles, 28 de marzo de 2012</u></b>	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Contraloría General del Estado (CGE)</b>
09:00 hrs. – 10:45 hrs.	<p><b>Panel 9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Funciones de la CGE.</b></li> <li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Necesidades de cooperación técnica.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u> Gabriel Hervas, Contralor General del Estado Henry Ara Pérez, Subcontralor General del Estado Edino Clavijo, Gerente Principal de Servicios Legales</p>
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Panel 10:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prevención de los conflictos de intereses.</b></li> <li>• <b>Declaraciones juradas de bienes y rentas.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u> Gabriel Hervas, Contralor General del Estado Henry Ara Pérez, Subcontralor General del Estado Edino Clavijo, Gerente Principal de Servicios Legales de la CGE Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del MTILCC Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción del MTILCC Ricardo Céspedes, Director General de Recuperación de Bienes del MTILCC</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<b>Almuerzo</b>
14:00 hrs. – 15:50 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Órgano Judicial: Consejo de la Magistratura</b>
	<p><b>Panel 11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos.</b></li> <li>• <b>Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mecanismos de control interno.</b></li> <li>• <b>Difusión de sus objetivos y funciones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Cristina Mamani, Presidenta del Consejo de la Magistratura Ernesto Aranibar, Decano del Consejo de la Magistratura Limbert Rojas, Secretario del Pleno del Consejo de la Magistratura
16:00 hrs. – 17:50 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Órgano Judicial: Tribunal Superior de Justicia</b>
	<b>Panel 12:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades.</b></li> <li>• <b>Difusión de sus objetivos y funciones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> José Miguel Hurtado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia María del Rosario Bazagoytia, Abogada Asistente
18:00 hrs. – 18:30 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b><u>Jueves, 29 de marzo de 2012</u></b>	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Seguimiento de recomendaciones de la Primera Ronda</b>
08:30 hrs. – 10:20 hrs.	<b>Panel 13:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preservación de los recursos públicos.</b></li> <li>• <b>Obligación de denunciar actos de corrupción.</b></li> <li>• <b>Prevención de los conflictos de intereses.</b></li> <li>• <b>Asistencia técnica y cooperación mutua.</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del MTILCC Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción del MTILCC



	<p>Roxana Duarte, Directora General de Asuntos Jurídicos del MTILCC</p> <p>Jessica Saravia, Directora General de Investigación de Hechos de Corrupción del MTILCC</p> <p>Ricardo Céspedes, Director General de Recuperación de Bienes del MTILCC</p>
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Panel 14:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acceso a la información y participación de la sociedad civil.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Galo Silvestre Bonifaz, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.</p> <p>Carlos Camargo, Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del MTILCC</p> <p>Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha contra la Corrupción del MTILCC</p> <p>Roxana Duarte, Directora General de Asuntos Jurídicos del MTILCC</p> <p>Jessica Saravia, Directora General de Investigación de Hechos de Corrupción del MTILCC</p> <p>Ricardo Céspedes, Director General de Recuperación de Bienes del MTILCC</p>
12:30 hrs. – 12:45 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
12:45 hrs. – 13:00 hrs. <i>Hotel Radisson</i>	<b>Reunión final</b> <sup>144/</sup> entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

144. El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

**AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

**ESTADO ANALIZADO:**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

Nardi Suño Iturry

Experta Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC  
Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

Alexandra Miranda

Jefa de la Unidad de Análisis Jurídico  
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

Olmer Torrejón

Jefe de Gabinete  
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Robert Leventhal

Experto Titular ante del Comité de Expertos y Director de Iniciativas Anticorrupción y de Gobernabilidad de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado

Jane S. Ley

Subdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Mario Hidalgo

Experto Titular ante del Comité de Expertos y Coordinador General de Relaciones Internacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Mónica Banegas

Consejera Titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Fabián Jaramillo Palacios

Superintendente de Telecomunicaciones

Pablo Valdivieso Cueva

Secretario General de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Edwin Jarrín Jarrín

Secretario Nacional de Transparencia de Gestión

Nelson Ayala Ayala

Asesor de la Superintendencia de Bancos y Seguros

Soledad Buendía Herdoíza

Asesora Política de la Defensoría del Pueblo

Irina Echeverría

Asesora Institucional del Instituto Nacional de Compras Públicas

Rubén Montoya Vega

Asesor de la Superintendencia de Compañías

Alejandro Fuentes Díaz

Asesor de la Fiscalía General del Estado

Miriam Garcés

Directora de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado

Pedro Rueda

Asesor del Viceministro de Relaciones Laborales

Eduardo Paz

Asesor de la Corte Nacional de Justicia

### **SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

Jorge García González

Director del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

Michael Thomas

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

Rodrigo Cortés

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA